

# INVESTIGACIÓN

## **DETERMINANTES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO Y DEL TRABAJO REMUNERADO. MAPEO COMPARADO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MÉXICO Y ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

Hilda Rodríguez Loredo



**OXFAM**  
México

# RESUMEN EJECUTIVO



© Oxfam México, julio de 2018

Este documento ha sido escrito por Hilda Rodríguez Loredó  
Fotografías propiedad de Oxfam México

## OXFAM MÉXICO

Oxfam México es parte de un movimiento global que trabaja en 94 países para poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad.

Juntos protegemos y reconstruimos vidas cuando sucede un desastre, combatimos la discriminación y la violencia contra las mujeres, defendemos los derechos de las personas y comunidades indígenas y luchamos para garantizar el acceso equitativo a los bienes comunes naturales.

A través de la investigación y la implementación de programas y campañas combatimos la desigualdad extrema y trabajamos con otras personas para lograr que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna.

# DETERMINANTES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO Y DEL TRABAJO REMUNERADO. MAPEO COMPARADO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MÉXICO Y ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

Hilda Rodríguez Loredó

Profesora de la Facultad de Economía. UNAM

Ciudad de México. Julio de 2018

# L

a distribución del trabajo de cuidados no remunerado y del trabajo remunerado es un tema que cobra relevancia a partir del reconocimiento de varios aspectos: uno, que es una distribución desigual de los trabajos entre mujeres y hombres; dos, que en esa distribución las mujeres quedan en desventaja en el ejercicio de sus derechos, ya que el predominio del uso de su tiempo en el trabajo de cuidados no remunerado la limita para contar con recursos para la satisfacción de las necesidades prácticas y estratégicas; tres, que ambos trabajos son básicos para el desarrollo económico y social de los países.

**a)** Políticas de corto plazo: que tienden al asistencialismo y carecen de procesos de evaluación de calidad.

**b)** Políticas sistémicas e integrales: orientadas a la distribución y a la promoción de un papel activo del Estado, que involucran un proceso de reconocimiento del trabajo no remunerado. Son políticas que se vinculan con los sectores de educación y trabajo.

**c)** Políticas para un nuevo pacto social: orientadas a cuestionar la división sexual del trabajo y a promover el desarrollo sostenible, donde el eje del cuidado es central para el desarrollo (Batthyány, 2015).

03

Numerosas políticas públicas dan muestra de la inclusión del tema en la agenda pública en América Latina con propuestas de atención de la distribución desigual con el propósito de hacer partícipes a otros actores y no solo a las mujeres integrantes de las familias; o con el objetivo de facilitar a las mujeres el acceso y disfrute de todos los derechos humanos; o con el fin de garantizar los cuidados de las personas por parte de sus familiares. Es decir, se alcanzan a observar políticas con perfiles diferenciados que Batthyány (2015) resume de la siguiente forma:

La investigación que se presenta busca aportar datos sobre las políticas de cuidado presentes en América Latina, de manera que sea posible la discusión abierta sobre las mejores propuestas para resolver el problema de desigualdad en la distribución, entre los sexos y otros actores, de los trabajos de cuidado no remunerado y remunerado. Este estudio es, entonces, una aportación al proceso de inclusión del tema de trabajo de cuidados no remunerados en la agenda pública. De esta manera, se trata de la búsqueda de la igualdad social entre los sexos y la solución a la pobreza en sus

distintas manifestaciones, ya que la deficiencia en el acceso a los recursos para resolver necesidades prácticas y estrategias es una expresión de las condiciones de pobreza. Los antecedentes de las políticas públicas actuales en México y América Latina tienen su origen en el reconocimiento internacional de la relación entre igualdad de género y desarrollo.

Es necesario un análisis de las posibilidades de conciliar el trabajo de cuidados con la exigencia del trabajo remunerado, condición necesaria para garantizar el derecho a la autonomía económica, el derecho al acceso y permanencia escolar y, por supuesto, el derecho al cuidado (de sí mismo y de otras personas). Las tensiones que hasta el momento se presentan entre ambos trabajos están relacionadas con la ausencia de políticas dirigidas a atender ese problema y la modificación de la cultura del menosprecio a la actividad reproductiva. La metodología seguida para analizar las políticas fue la de los Marcos interpretativos con perspectiva de género que, mediante preguntas específicas, permite identificar los sesgos familistas<sup>1</sup> que reproducen la distribución de los trabajos no remunerados a las mujeres y remunerado a los hombres, lo que extiende la permanencia de la pobreza y otras desigualdades.



Los antecedentes de las políticas públicas actuales en México y América Latina tienen su origen en el reconocimiento internacional de la relación entre igualdad de género y desarrollo.

Los resultados obtenidos con el análisis de las políticas públicas de Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Uruguay muestran que en el diseño de la política relacionada a los cuidados de las personas en América Latina permanece el sesgo familista (en México, Argentina, Brasil y Costa Rica) lo que reproduce la asignación de estas tareas a las mujeres. Aunque en Brasil y Costa Rica las leyes señalan la participación de los hombres en las actividades de cuidado no se mencionan específicamente cuáles son esas actividades, lo que podría reducir su participación. Un problema identificado es que la inclusión de los hombres en los cuidados hace referencia a los dirigidos a la infancia; sin embargo, los que se dirigen a las personas mayores, con alguna enfermedad o discapacidad, solo consideran el otorgamiento de servicios por parte del Estado, lo que podría significar que las mujeres asumen la alimentación y el transporte hacia los centros de atención.

Aunque se observan avances importantes en el diseño de medidas para la participación de las mujeres en las actividades laborales remuneradas, sigue pendiente que los hombres participen en los mismos términos que las mujeres en el trabajo no remunerado, que el Estado provea servicios de cuidado de calidad y que las empresas consideren el papel social que tienen para desarrollar a los países con igualdad de derechos y de género. Ya que las características de las leyes analizadas que definen los programas y acciones para los cuidados muestran la reproducción de los sesgos de género en la asignación de tareas no remuneradas, las mujeres continuarán enfrentando dificultades para ejercer otros derechos, como el acceso al trabajo remunerado, a mejores ingresos, al tiempo libre, a la formación y capacitación, a la participación política, entre otros.

La identificación de las leyes, según la clasificación de Batthyány (2015), muestra que el país con menores propuestas de cambio en las asignaciones de género de los trabajos de cuidado y remunerado es Argentina, al que sigue México, luego Brasil y Costa Rica para llegar a Uruguay, con la mejor propuesta para modificar la división sexual del trabajo que limita el ejercicio de los derechos por las mujeres.

<sup>1</sup> Refiere a la forma como se resuelven las necesidades de las y los integrantes de las familias donde predomina la cultura familiar de reciprocidad y solidaridad, sin embargo, se basa en la división sexual del trabajo donde las mujeres son las principales responsables de los cuidados y los hombres son los sustentadores.

RESUMEN EJECUTIVO	3
Pautas de comportamiento y trabajo de cuidados en México	12
Políticas públicas y equidad de género	13
MARCO TEÓRICO	17
La reconceptualización del trabajo	17
El trabajo de cuidados	18
La interseccionalidad	18
Los cuidados como derecho	19
La corresponsabilidad entre estado, empresas, familias y comunidad	20
El papel del trabajo de cuidados no remunerado en la organización económica y social	20
La visión de la economía feminista sobre la organización del trabajo	21
La respuesta pública para la solución de los conflictos.	22
El alcance de las normas	22
METODOLOGÍA	25
La revisión documental	26
Herramientas para el análisis	26
Unidad de análisis	26
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA	29
Argentina	29
Brasil	35
Costa Rica	41
Uruguay	46
México	52
La política laboral del ámbito público en México	57
A manera de conclusión, un análisis general de la política	59
Un ejemplo ilustrativo de la visión de algunos actores políticos	63
COMENTARIOS	65
LECCIONES PARA MÉXICO DE LAS EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS DE CUIDADOS DE OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS	67
FUENTES DE INFORMACIÓN	69



# JUSTIFICACIÓN

**“...es evidente que todavía prevalece poco interés en estos dos importantes asuntos sociales: la igualdad de género y la pobreza.”**



Incluir la dimensión de género en las estrategias de desarrollo de América Latina y el Caribe abre un nuevo marco analítico para el debate y la generación de políticas públicas, en donde destaca la incorporación de la nueva noción de trabajo que incluye el trabajo productivo y reproductivo, así como el ejercicio de los derechos de las mujeres como una condición para el crecimiento económico y el aumento del bienestar en la población. Si bien el desarrollo económico es una condición indispensable para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, resulta insuficiente si no va acompañado de medidas adicionales. Actualmente los tres principales desafíos son: a) insertar el tema en la agenda pública de cada país; b) promover cambios de los marcos legales; y c) generar las políticas públicas necesarias (CEPAL et al, 2013).

Respecto de las políticas públicas en México y debido a la identificación de los dos aspectos fundamentales que las afectan, esto es, la discriminación y la pobreza, la problemática de las mujeres fue incluida en los programas gubernamentales a partir de mediados de los años setenta y decididamente en los ochenta del siglo pasado (Tepichin, 2012).

La búsqueda de la igualdad y la solución a la pobreza en sus distintas manifestaciones serán algunos de los ejes conductores que dirigirán los esfuerzos de la política pública nacional y mundial en lo que a asuntos de mujeres se trata. Los antecedentes de las políticas públicas actuales en este

país tienen su origen en el reconocimiento internacional de la relación entre igualdad de género y desarrollo.

La creación de la institucionalidad de género, como las instancias gubernamentales nacionales que actualmente existen como resultado del reclamo de las mujeres y de diversos compromisos internacionales del Estado, iniciaron sus operaciones de una manera muy informal y, con el paso del tiempo, tanto la observación internacional como la obligación del cumplimiento con las normas originaron que ahora cuenten con reconocimiento, espacios, personal y recursos en general, lo cual les permite desarrollar las actividades que les corresponden; sin embargo, es evidente que todavía prevalece poco interés en estos dos importantes asuntos sociales: la igualdad de género y la pobreza.

El presente estudio trata de contribuir con el proceso de inclusión del tema de trabajo de cuidados no remunerados en la agenda pública a través del estudio de las políticas que tratan de resolver las necesidades de cuidado de las personas. Veremos si estas políticas se esfuerzan por contrarrestar la desigualdad en la distribución del trabajo de cuidados no remunerado y del trabajo remunerado entre las mujeres y los hombres, así como entre las familias, las empresas, el Estado y la comunidad, analizando las contribuciones que desde diversos países de América Latina se han realizado para atender este problema.





# INTRODUCCIÓN



Incorporar el tema de la situación de las mujeres en las políticas públicas ha significado un gran logro. Aun es necesario resolver la cuestión del poder al interior de la unidad doméstica e incluir acciones orientadas a la desaparición de la desigualdad originada por la división sexual del trabajo, así como estimular la participación de las mujeres para el diseño de las políticas, es decir, dar el siguiente paso y dejar de ser objeto de la política pública para ser sujeto de la misma. La participación de las mujeres en el trabajo remunerado ha sido otro de los asuntos abordados profunda y minuciosamente. El estudio del trabajo remunerado en las sociedades modernas produjo dos concepciones teóricas pero con una visión restringida de dicha actividad. Por un lado, se sostuvo el argumento de que el trabajo es aquél que se compra, se vende y/o se realiza en el ámbito de mercado. Un concepto distinto es aquél que reconocía como trabajo a toda actividad relacionada con la riqueza material de la sociedad (De la Garza, s/f).

Desde finales del siglo XVIII el pensamiento económico, al asociar progresivamente el trabajo al mercado y al salario, contribuyó de manera determinante a la desvaloración económica del trabajo doméstico y de cuidados, adscrito socialmente a las mujeres y niñas. La inclusión de las mujeres al mercado laboral actual ha sido un proceso constante en los últimos 25 años<sup>2</sup>. Algunos de los factores que lo explican son: la necesidad de aportar ingresos a la familia para cubrir las necesidades básicas, el aumento de los hogares con jefatura femenina<sup>3</sup>, el retardo en el inicio de la maternidad<sup>4</sup>, la expansión de la tasa de escolaridad<sup>5</sup>, y el aumento de la conciencia de sus derechos como ciudadanas. A pesar de estos avances, las mujeres aún tienen menos probabilidades de trabajar de manera remunerada<sup>6</sup> que los hombres y una proporción alta solo encuentra empleo en las actividades del sector de servicios de menor paga. No obstante las condiciones laborales en que se han

**2** En América Latina, según datos de la tasa de actividad laboral de las mujeres aumentó de 38.1% en 1990 a 52.5% en 2010 (CELADE 2013, en Esteve Palós y Flores-Paredes, 2014). En México, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó de 25.77% en 1990 (Comisión Económica para América Latina) a 43.6% en 2016 (cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al II Trimestre de 2016, INEGI)

**3** En América Latina la jefatura femenina de los hogares aumentó de 13.0 en 1990 a 17.2% en 2010 (Ullmann, Maldonado y Nieves, 2014); en México, de 17.3% en 1990 a 24.6% en 2010 (Acosta y Solís, 2014).

**4** En México, “la probabilidad de tener al primer hijo antes de cumplir 20 años pasó de 32.1 a 31.4 por ciento para las generaciones 1965-1969 y 1980-1984, respectivamente, lo cual evidencia una incipiente disminución en el porcentaje de mujeres que a los 19 años tenía un hijo” (CONAPO, 2011). En el trienio 2011-2013, la edad promedio del inicio de la maternidad es de 21.1 años según la Encuesta Nacional de la Dinámica demográfica de México 2014 (citada en INEGI, 2017).

**5** La escolaridad promedio en América Latina ha aumentado en 4.5 años en las mujeres mayores de 20 años nacidas de la década de 1940 a la de 1980 (Esteve Palós y Florez-Paredes, 2014).

**6** En el II trimestre de 2016 la tasa de participación de los hombres en el mercado de trabajo era de 77.6% frente a 43.6% de las mujeres. Por otra parte, 79.2% de las mujeres se encontraban laborando en el sector servicios con una participación de 50% en el rango de ingresos de 0 hasta 2 salarios mínimos (cálculos propios con base en INEGI, 2016).América Latina) a 43.6% en 2016 (cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al II Trimestre de 2016, INEGI)

desempeñado las mujeres, su empleo ha cumplido una función fundamental en el sostén económico de sus hogares. El aporte de las mujeres al ingreso de los hogares mexicanos representa el 33.9%; es el único ingreso en el 13.3% de los hogares y solamente el 27.9% de ellos no contaron con ingresos femeninos durante 2010 (INMUJERES, 2013).

Después de una larga lucha reivindicativa, el trabajo de cuidados se coloca en el imaginario social e inicia un proceso que le permite dejar de ser desvalorizado, insignificante, oculto y desconocido en la percepción colectiva. Es decir, al ser estudiado en la academia, en los organismos internacionales y discutido en foros gubernamentales, se van construyendo condiciones para que mujeres y hombres empiecen a poner atención en esas labores y reconozcan la importancia del trabajo de cuidados. Actualmente, el trabajo de cuidados comienza a tener valor, significado, a ser visible y reconocido como lo que es: Trabajo. Al dar inicio el proceso de reconocimiento de este trabajo entendemos la necesidad de avanzar en el diseño e implementación de políticas que refuercen y den mayor impulso a este proceso.

Las tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son una labor imprescindible para la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas, es decir, son sumamente relevantes para el Estado. A través de este trabajo las mujeres entregan -sin remuneración alguna- un subsidio al sistema social y económico en su conjunto (Carrasco, 2011).

Tras varias décadas de esfuerzo, quienes han trabajado el tema logran ubicarlo como objeto de estudio. Hoy, el trabajo de cuidados es un campo de investigación prometedor en la sociología y la economía feminista (Carrasco, 2011) y se trabaja arduamente en sus categorías de análisis. Además, ahora se cuenta con el aval de la tradición anglosajona predominante en el mundo del conocimiento científico y también ha despertado el interés de especialistas en políticas de bienestar.

La perspectiva histórica muestra la modificación del desempeño de las labores domésticas. En los hogares preindustriales las funciones productivas y reproductivas se realizaban en el mismo lugar; el surgimiento de la industrialización trasladó las funciones productivas fuera del hogar, generándose una domesticidad diferente donde se hicieron presentes distintos comportamientos producto del proceso de industrialización y urbanización, desarrollo de los servicios, la vivienda, el consumo de masas, las transformaciones demográficas, las higienes pública y privada, y las relaciones individuo-familia-Estado dentro de las nuevas formas de ciudadanía. Inevitablemente se generó la construcción de las nuevas identidades femeninas y masculinas.

Las hipótesis más arraigadas sobre el incremento de las horas de trabajo de las amas de casa apuntan precisamente al trabajo de cuidados, en especial de los y las menores

dependientes. La higiene y la morbilidad, la nutrición y la salud, establecieron rígidas normativas sobre la higiene privada haciendo recaer sobre las amas de casa la responsabilidad de los éxitos y fracasos en el mantenimiento de la salud, la vida y el bienestar de los hijos e hijas, aunque también del resto de miembros de la familia (Carrasco, 2011).

El trabajo de cuidados tiene valor. Actualmente, en distintos espacios públicos y privados, tanto académicos como de la sociedad civil, trabajan con diversas metodologías calculando el costo monetario de esta indispensable actividad económica; no obstante, su valor económico también se refleja en la reproducción de la organización económica a la que le da sustento a través de la manutención de la fuerza de trabajo, de garantizar salud física y emocional a la población.

Investigar acerca del uso del tiempo en mujeres y hombres ha revelado no solamente las actividades en las que ocupan su tiempo unas y otros, también nos muestra que las jornadas laborales son mucho más largas para ellas que para ellos.

En estas jornadas destacan las labores de cuidados que implican tareas diversas como el aseo, la administración de suministros para el bienestar familiar, la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado para el desarrollo integral de la primera infancia, la atención a las y los enfermos temporales y permanentes, así como la conservación de la autonomía de las personas mayores y las personas con discapacidad en situación de dependencia.

Independientemente del tratamiento emotivo que se utilice en la responsabilidad de cuidar a las niñas y niños, personas con discapacidad, población adulta mayor y personas con alguna enfermedad, está presente una realidad que nos alerta por el advenimiento de nuevas condiciones poblacionales que en un futuro muy próximo cambiarán radicalmente la constitución, los hábitos y las dinámicas de las familias debido, principalmente, al incremento en la convivencia y cohabitación con las personas adultas mayores.

La diversidad de necesidades y demandas de atención exige la participación de distintas instituciones públicas en las políticas correspondientes así como la existencia de un marco institucional integral, coordinado y sólido (Batthyány, 2015).

Desde la perspectiva organizacional existen las políticas tanto para las poblaciones destinatarias como para las personas proveedoras de cuidados; sin embargo, la obligación en tareas de cuidado no ha dejado de considerarse una labor mayoritariamente femenina.

En América Latina encontramos, fundamentalmente, tres tipos de políticas de cuidado:

1. Políticas de corto plazo: que tienden al asistencialismo y carecen de procesos de evaluación de calidad.

2. Políticas sistémicas e integrales: orientadas a la distribución y a promover un papel activo del Estado que involucran un proceso de reconocimiento del trabajo no

remunerado. Son políticas que se vinculan con los sectores de educación y trabajo.

3. Políticas para un nuevo pacto social: orientadas a cuestionar la división sexual del trabajo y a promover el desarrollo sostenible, donde el eje del cuidado es central para el desarrollo (Batthyány, 2015).

Sin duda, las del tercer tipo son las que esperaríamos encontrar en América Latina debido a que las menores tasas de participación de las mujeres en el trabajo remunerado como en otras actividades del ámbito público y los menores ingresos, que se reflejan en la persistencia de las desigualdades de género y la pobreza feminizada, están relacionadas con la responsabilidad casi exclusiva que ellas tienen en el trabajo de cuidados, por lo que este numeroso grupo está excluido de participar en la generación de la riqueza, lo que provoca efectos negativos tanto para el ejercicio de otros derechos por parte de las mujeres como para la sociedad en su totalidad

.

Parte de las políticas de cuidado hacia la población se desarrollan en el ámbito laboral. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

**A lo largo de la historia, las preocupaciones de la OIT en relación con la protección de la maternidad han sido las mismas: preservar la salud de la madre y del recién nacido; habilitar a la mujer para que pueda combinar satisfactoriamente su rol reproductivo y su rol productivo; prevenir el trato desigual en el trabajo remunerado debido a su rol reproductivo; y promover el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres. La OIT ha adoptado tres Convenios sobre la protección de la maternidad en diferentes años: en 1919, 1952 y, el más reciente, en 2000, el Convenio sobre Protección de la Maternidad (núm. 183). Estos instrumentos estipulan medidas de protección para las trabajadoras embarazadas y las que acaban de dar a luz; entre otras cosas, se ocupan de la prevención de la exposición a riesgos de seguridad y salud durante el embarazo y después del mismo, del derecho a una licencia de maternidad, a servicios de salud materna e infantil y a interrupciones remuneradas para la lactancia, de la protección contra la discriminación y el despido en relación con la maternidad, y de un derecho garantizado a reincorporarse al trabajo tras la licencia de maternidad. (OIT, 2014).**

Las legislaciones en materia laboral, salud, desarrollo social, contra la discriminación, por la igualdad, en favor del empoderamiento de las mujeres, por los derechos de las niñas y los niños, para las personas con discapacidad y la población adulta mayor han logrado colocar el trabajo de cuidados en un lugar preponderante en la agenda política.

Los programas anuales (conjunto de medidas formulado para resolver uno o varios problemas públicos) han sido útiles en alguna medida (para ser programas eficientes tendrían que cumplir con todos los objetivos que se establecieron), pero aún hay mucho por hacer para transformar el actuar cotidiano. **Es imprescindible revisar el alcance de la cobertura en la legislación y en la práctica. Es preciso distinguir entre cuántas trabajadoras tienen el derecho legal a la protección de la maternidad, y cuántas efectivamente hacen uso de ello en la práctica. Dependiendo de la forma en que las leyes se aplican y se hacen cumplir, surge una disparidad entre estos dos aspectos. Brechas en la cobertura guardan relación con el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos y las prestaciones de que gozan por ley; la limitada capacidad contributiva; los retos de los sistemas de seguridad social; la aplicación inadecuada; las prácticas discriminatorias; la informalidad y la exclusión social (OIT, 2014).**

En el marco del trabajo de cuidados, la Organización de Estados Americanos (OEA) considera que la inexistencia o disfuncionalidad de las políticas de conciliación vida familiar-vida laboral implica, por una parte, la subutilización de la fuerza de trabajo femenina; y, por otra, un bajo nivel de productividad como resultado de la tensión entre los dos espacios de vida.

Es indispensable considerar que mientras las mujeres sigan siendo percibidas como responsables exclusivas del trabajo de cuidados, la carencia o debilidad de las políticas públicas de conciliación que brindan apoyo a la población para el cuidado infantil y de personas dependientes produce otro efecto discriminador, que dificulta a las mujeres pobres salir de su situación. La oferta de servicios de atención para grupos prioritarios como niñas, niños, personas mayores o enfermas que sean accesibles, extendidos y de calidad se concentran en el sector privado, de manera que solo están disponibles para quienes cuentan con mayores recursos (OEA-CIM, 2011).

Sobre las personas mayores, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) redactó los Principios en favor de las personas de Edad desde 1991, que alentaron el posicionamiento de los gobiernos con respecto a los derechos de esta población; más adelante, en el Año Internacional de las Personas de Edad, en 1999, y la celebración de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en 2002, este proceso se intensificó y continuó hasta la actualidad, gracias al impulso de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptada en 2003, y de la Declaración Brasilia, en 2007 (CEPAL, 2011).

La mayor parte de los trabajos de cuidados ejercidos en México son labores realizadas en los hogares por las mujeres.

## PAUTAS DE COMPORTAMIENTO Y TRABAJO DE CUIDADOS DE MÉXICO

En México estamos experimentando el inicio de un cambio en las pautas de comportamiento tradicionales entre hombres y mujeres. La diversidad de condiciones de una población de alrededor de 120 millones de habitantes plantea una vasta gama de demandas, debido a que poco más de 25 millones vive en áreas rurales –sobre todo al sur y sureste del país– y más del 80% se dicen católicos; constituyen un enorme mosaico de costumbres, preferencias, niveles

educativos, ingresos y edades que se combinan con las diversas razones que motivaron la salida del confinamiento de las mujeres al hogar, por lo que las demandas sociales se presentan, simultáneamente, a un enfrentamiento con el modelo tradicional de familia que las hacía permanecer en la esfera privada.

La mayor parte de los trabajos de cuidados ejercidos en México son labores realizadas en los hogares por las mujeres. El cuidado es un trabajo exigente que obliga a la reclusión en el hogar. La cantidad de población mexicana que requiere de cuidados son aproximadamente 30.4 millones de menores de 15 años; 6.8 millones de enfermos temporales; 3.5 millones de enfermos crónicos; 1.2 millones de personas con discapacidad y una gran parte de los 10. 6 millones de personas adultas mayores (INMUJERES, 2014).

De acuerdo con Marta Seiz (2011), investigaciones realizadas en relación con el uso del tiempo en países de América Latina muestran que, en el caso de las familias mexicanas, los hombres por lo general dedican poco tiempo a los cuidados de niñas/os, personas enfermas o dependientes y lo hacen,

además, en menor medida que las mujeres. Una proporción importante no se involucra en las tareas de cuidados y gran parte de quienes sí lo hacen dedica pocas horas a esta labor. A pesar de ello, el modelo tradicional que atribuía la responsabilidad de los cuidados únicamente a las mujeres empieza a manifestar un evidente desgaste: se ha identificado un porcentaje significativo de varones que sí participa de forma visible en estas tareas e, incluso, una minoría lo hace en un grado notable en términos de tiempo invertido. Las características de este sector social son: juventud, alto nivel educativo y mayores ingresos en pareja; esta situación se puede asociar a una incipiente transformación de valores, actitudes y pautas de comportamiento familiares. Podríamos entender entonces que, si no hemos cambiado más rápidamente en favor de la distribución más igualitaria y justa del trabajo de cuidados, es porque su organización en el hogar (y en la sociedad en su conjunto) es atravesada, además del género, por otros factores como el nivel educativo y el nivel de ingreso, entre otros.

Es importante conciliar con el trabajo de cuidados y la exigencia del trabajo no remunerado, el derecho a la autonomía económica, al acceso y permanencia escolar, a la igualdad de oportunidades, a elegir, y a un desarrollo y crecimiento profesional. Pero, adicionalmente, es indispensable dejar en el pasado la cultura del menosprecio a esta importante actividad reproductiva e incluir equitativamente a los hombres en estas labores.



## POLÍTICAS PÚBLICAS Y EQUIDAD DE GÉNERO

Para lograr la tan necesaria autonomía económica de las mujeres es fundamental generar políticas de protección social, mecanismos de acceso a la seguridad social universal, de ahorro para el retiro y de subsidio para la vivienda; operar programas de desarrollo económico y fomentar el empleo con perspectiva de género; diseñar acciones afirmativas para que desde las reglas de operación las mujeres puedan acceder a programas de fomento; aplicar la Ley Federal del Trabajo con especial énfasis en garantizar el cumplimiento de la igualdad salarial y erradicar la discriminación por embarazo o maternidad; ejecutar programas para la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, con la participación del sector privado, el gobierno y las trabajadoras y trabajadores; ampliar la infraestructura para apoyar las tareas de cuidado; y ratificar las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (INMUJERES, 2014).

El comportamiento de las mujeres en México se encuentra en un proceso de cambio que inició con determinación hace aproximadamente cinco décadas. En una rápida revisión de distintos tipos de investigaciones en relación con su forma de actuar, vivir y desarrollarse, observamos la diversidad de condiciones en las que se desenvuelve la vida de la población de mujeres en nuestro país. En la última década han sido registrados procesos en distintos municipios que integran el territorio nacional, en los que las mujeres han sido objeto y sujeto de la acción pública; estas medidas fueron aplicadas principalmente con el fin de mejorar las condiciones en las

que desarrollan el trabajo de cuidados, su participación en el trabajo remunerado y el ejercicio de otros derechos, como la participación política. Ejemplo de ello es que los gobiernos federal, estatales y municipales han implementado experiencias de atención a mujeres, madres trabajadoras, jefas de hogar y madres adolescentes en situación de vulnerabilidad, con la implementación de Casas de Atención Infantil (CAI) para madres trabajadoras que habitan en comunidades marginadas de Tijuana (López E., 2007); hospedaje y alimentación a madres solas y adolescentes desempleadas y rechazadas por sus familias en Aguascalientes (Ortiz y Maza, 2010); y la entrega de paquetes de ecotecnia para protección del medio ambiente y ahorro de trabajo en acarreo de agua para mujeres por parte de SEMARNAT y la Agencia de Desarrollo Sierra Gorda en Querétaro (Contreras et al., 2011).

También existen casos de mujeres que se han organizado y exigido respeto y apoyos para desempeñar sus actividades, logrando la instalación de Casas de la Salud para mujeres indígenas en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI) (Terrazas, 2009); la creación de la Coordinación de Atención a la Mujer en Tabasco, con reglamentos y leyes estatales que incluyen los temas de derechos y equidad de género gracias a las demandas de las mujeres



El comportamiento de las mujeres en México se encuentra en un proceso de cambio que inició con determinación hace aproximadamente cinco décadas.



# **¡ PENSAR EN SOLUCIONAR ESTE DESEQUILIBRIO EN TÉRMINOS DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES SIGNIFICA QUE SÓLO EN LAS MUJERES SE DELEGA EL TRABAJO DE CUIDADOS; LA SOLUCIÓN NO ES ASÍ DE SIMPLE PORQUE “LAS RAÍCES DEL INJUSTIFICADO PROBLEMA DISCRIMINATORIO SE ENCUENTRAN EN COMPORTAMIENTOS ARRAIGADOS, SOCIALIZADOS, TOLERADOS Y HASTA SOCIALMENTE CELEBRADOS”**

de comunidades rurales (Rodríguez W., 2008); y la creación de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas a partir de la participación de mujeres en organizaciones productivas y de consumo, en defensa de la procuración de justicia y en favor de la participación social y política (Díaz et al., 2009). Otras investigaciones muestran las condiciones en las que se dan los acuerdos para el trabajo doméstico remunerado en Nuevo León –específicamente en Monterrey (Moreno, 2013) –; y en Chiapas, donde las labores se acercan a una situación de esclavitud (López S., 2009). Finalmente, otras investigaciones nos muestran casos como el de los logros por las nuevas socializaciones que viven las mujeres jefas de hogar en Guanajuato (Lázaro et al., 2005); los logros y obstáculos que vivieron las presidentas rurales municipales (14 expresidentas municipales entrevistadas) y cómo conjugaron la vida laboral con la vida familiar en Tlaxcala (Chávez y Vázquez, 2011); y el cálculo de la aportación económica que realizan las mujeres por el trabajo de cuidado gratuito en Jilotepec, Estado de México (Alberti et al., 2014). A la vista, solo parece tratarse de casos aislados de mujeres apoyadas por el gobierno, o no, organizadas o no, que actúan de manera improvisada; sin embargo –desde una perspectiva nacional– detrás de todas estas acciones existe un común denominador que es el objetivo de atender, mejorar y resolver el trabajo de cuidados y/o la conciliación vida familiar-vida laboral, así como hacerse cargo de su familia. Muchas de las acciones emprendidas por las mujeres que viven en áreas urbanas y rurales en México están relacionadas con el ánimo de asistir, alimentar y proteger a sus familias, es decir, con ejecutar labores de cuidado directa o indirectamente.

Para atender este asunto, que crece día con día, es necesario reflexionar sobre el quehacer cotidiano de las mujeres, considerar que son obreras, campesinas, artesanas, comerciantes, empresarias, políticas, estudiantes, profesionistas, activistas, artistas, trabajadoras remuneradas en los hogares, de algún pueblo indígena, etc., que en ocasiones trabajan por cuenta propia, tienen ingresos por pequeños negocios y subsisten con aportaciones irregulares diversas. Y muchas de ellas, siendo madres o no, combinan estas actividades laborales con el trabajo de cuidados; no debemos perder de vista que son ciudadanas con derechos, no solo con obligaciones. Pensar en solucionar este desequilibrio en términos de responsabilidades y obligaciones significa que sólo en las mujeres se delega el trabajo de cuidados; la solución no es así de simple porque “las raíces del injustificado problema discriminatorio se encuentran en comportamientos arraigados, socializados, tolerados y hasta socialmente celebrados” (Aguilar, 2015:30). La política pública para la igualdad y contra la discriminación debe ser una empresa gubernamental-social y con su intervención, además de exigir el compromiso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial contra las arbitrariedades

14

y transgresiones de la ley, deben crearse, desarrollarse y activarse las capacidades de la sociedad civil a fin de comprender lo absurdo e injusto de la desigualdad, así como crear, desarrollar y consolidar condiciones que posibiliten formas de asociación y corresponsabilidad gubernamental-social y público-privada (Aguilar, 2015).

Impulsar a que actúen quienes padecen injusta e indignamente situaciones de discriminación e irrespeto, exige involucrar a las mujeres en la solución de sus problemas y, en consecuencia, desarrollar sus capacidades jurídicas, políticas, cognoscitivas, argumentativas y de organización social para revertir su situación; señalar transgresiones; denunciar a las autoridades y ciudadanos de comportamientos y acciones arbitrarios y ofensivos; argumentar sus derechos; criticar negligencias de las autoridades; incentivar vínculos de solidaridad; y crear redes cada vez más amplias y robustas (Aguilar, 2015). La búsqueda de un equilibrio en estas tareas nos conduce inevitablemente a la corresponsabilidad social. Desde el punto de vista gubernamental y respecto del trabajo de cuidados, los programas de trabajo del Ejecutivo Federal han concentrado la atención de la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un enfoque que se dirige a la población de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, enfermos temporales y mujeres en situación vulnerable, sin establecer una política pública integral.

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 9, Inciso B, Derecho al Cuidado, dicta: Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

Entendemos la relevancia de las leyes y las políticas públicas para impulsar el mejoramiento de la población, mas es importante tener claro que:

por política pública se entiende un conjunto de acciones decididas por el gobierno en interlocución e interacción con la sociedad a fin de atender un problema público o realizar un objetivo de interés público [...]. Las políticas públicas de igualdad son las acciones decididas para llevar a cabo con calidad y efectividad las tres obligaciones básicas del Estado, reconocidas constitucionalmente que son respetar, proteger y realizar los derechos humanos, lo cual implica



promover, proteger y realizar la igualdad en derechos, valor, libertades, trato, etc. (Aguilar, 2015: 26-27).

De esta manera, no debemos perder de vista que se trata de un compromiso en corresponsabilidad.

Las leyes, decretos, programas y reglamentos también necesitan acompañarse de mensajes certeros, adecuados y coherentes con las políticas públicas en los medios de comunicación masiva, el arte, la ciencia, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales. Los marcos normativos de cada país pueden representar el fundamento para la reorganización del trabajo de cuidados. Sin embargo, si no ha existido o no existe un esfuerzo consciente del diseño de un marco normativo que contrarreste la división sexual del trabajo, así como las pautas que marcan las creencias, normas sociales y actitudes colectivas que reproducen los roles tradicionales de género, es probable que las leyes reproduzcan las desigualdades vinculadas a la distribución del trabajo de cuidados. Por ende, esta investigación parte de la convicción de que las leyes, que marcan la base del diseño e implementación de las políticas públicas, tienen un papel primordial para impulsar los cambios necesarios al interior de los hogares, en las comunidades, en el Estado y en el mercado para hacer posible la corresponsabilidad de los cuidados en la sociedad.

15



# MARCO TEÓRICO

B

ergery y Luckman señalan que la realidad social como expresión del orden social es una construcción que se deriva y alimenta de la actividad de las personas. La actividad de las personas crea pautas que son aprendidas y crean hábitos, modelos de comportamiento que son institucionalizados al momento de ser aprendidos como rutinas (Berger y Luckman, 1991). La división sexual del trabajo es una forma de organización de la sociedad que se institucionalizó desde que las mujeres y los hombres se habituaron a realizar (desarrollar) las tareas

que la sociedad les asignó a partir de lo que se consideró podían llevar a cabo por sus características sexuales; romper con estos hábitos requiere esfuerzos desde la formulación de políticas, la discusión al interior de las familias y la comunidad, así como la inclusión como tema de análisis en la academia. Se ha avanzado en todos esos sentidos y hoy, en la sociedad, se pueden observar indicios de cambio en la división sexual del trabajo.

## LA RECONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO

Las grandes transformaciones teóricas de los últimos tiempos tienen en la categoría de Género una explicación. Las ciencias sociales iniciaron un proceso de enriquecimiento conceptual al incluir en sus temas de estudio la situación específica de las mujeres y distinguirla de la de los hombres; además, propició un cuestionamiento a los conceptos que fueron creados desde la perspectiva masculina, es decir, significó “un cambio radical en la perspectiva de análisis que implica deconstruir los conceptos, modelos y paradigmas utilizados habitualmente por las disciplinas sociales y elaborar nuevas categorías y marcos teóricos que tiendan hacia paradigmas alternativos (Carrasco, 2008). El uso de la categoría Género ha favorecido la configuración

de nuevos desarrollos teóricos y enriquecido el saber científico en diferentes áreas de conocimiento como las ciencias sociales y de la salud (Rodríguez W., 2008). En el tema que nos ocupa, el concepto de Trabajo fue nuevamente construido ya que, al configurarse, solo se consideró el llevado a cabo por los hombres en el terreno del mercado y excluyó el que las mujeres realizan en el ámbito de los hogares. Hoy empieza a ser entendido de manera integral; sin embargo, se puede todavía encontrar entre las mujeres y los hombres la comprensión del trabajo como el que se realiza de manera remunerada en el ámbito público. La división sexual del trabajo (DSxT) que asignó la producción en los hogares a las mujeres y la producción de mercado a



los hombres, organizó las tareas por realizar, los espacios en los que se realizan, la distribución de las responsabilidades, los recursos, las ganancias, así como las habilidades y destrezas y, por tanto, es una de las estructuras que nutren la identidad de género. La organización del trabajo favorece relaciones sociales jerárquicas, ya que el realizado en el terreno del mercado es el reconocido, valorizado y pagado, mientras que el de los hogares es no retribuido, oculto en las relaciones económicas, devaluado en la academia y no reconocido en la sociedad, lo que coloca a las mujeres en una situación de

## EL TRABAJO DE CUIDADOS

Corina Rodríguez (citando a Batthyány) refiere el trabajo de cuidados como el que “ofrece los bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. Abarca por tanto al cuidado material que implica un trabajo, al cuidado económico que implica un costo y al cuidado psicológico que implica un vínculo afectivo” (Rodríguez E., 2005: 2). Esta definición incluye tanto el trabajo realizado para los cuidados de sí mismas/os (autocuidado), y el realizado para las y los demás. Significa que es un trabajo multidimensional y complejo que requiere condiciones favorables para su mejor desempeño, lo que muestra la necesidad de su reglamentación.

## LA INTERSECCIONALIDAD

Adicionalmente a la organización del trabajo (remunerado y no remunerado), el género y las desigualdades sociales que produce no solo se configuran por las características sexuales, sino por otro conjunto de rasgos que generan diferencias en el trato de las personas tales como la clase social, la edad, la etnicidad, la orientación y preferencia sexual, la condición de migración y el lugar de residencia; todos ellos ofrecen a los trabajos que se realizan diversas características que deben ser consideradas para su atención. En particular, los trabajos de cuidado se realizan bajo condiciones diferentes según se combinen todos estos rasgos.

[La interseccionalidad] comienza con la premisa de que la gente vive identidades múltiples, formadas por varias capas, que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras del poder. Las personas pertenecen a más de una comunidad a la vez y pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea (por ejemplo, una

desventaja y al trabajo que realiza como secundario. Por otra parte, las tareas que se realizan en el mercado en donde se encuentra una mayor proporción de hombres cuentan con reglas de funcionamiento, leyes y normas que regulan las relaciones laborales en términos de tiempo, remuneraciones, descansos, estímulos, entre otros aspectos; al contrario, el trabajo que se realiza en el hogar no cuenta con reglas que faciliten responsabilidades compartidas ni respeto a los tiempos y energía de las mujeres que lo desarrollan.

El reconocimiento que hoy se da como trabajo al realizado por las mujeres en los hogares no es suficiente para valorar su importancia en la reproducción económica y social, ni para que ellas cuenten con una posición de género que garantice el ejercicio pleno de sus derechos, ni para poner atención en los resultados de ese trabajo: el bienestar de la población. Dice Carrasco: “Tradicionalmente- y al contrario de lo que debería suceder- la organización social de los tiempos -de trabajo- ha estado en función de la producción mercantil; esa situación va en desmedro de la calidad de vida, lo que es aún más patente en la actualidad puesto que el problema se ha agudizado” (2008: 238).

**mujer puede ser una médica respetada, pero sufrir violencia doméstica en casa). El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades. Busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres (AWID, 2004: 2).**

**La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. Se trata, por lo tanto, de una metodología indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y los derechos humanos” (AWID, 2004: 1).**

No es el mismo trabajo de cuidados el que realizan las mujeres jóvenes del municipio de Tlaxiaco, en Oaxaca<sup>7</sup>, que

el de las mujeres jóvenes de la colonia Obrera en la Ciudad de México. Las primeras tendrán que acarrear agua para lavar la ropa y limpiar la casa, lo que añade una actividad más a los trabajos de cuidado, mientras que las segundas cuentan con el servicio de agua corriente en su domicilio; las primeras tendrán que recurrir a los textos escolares para responder preguntas de sus hijas/os; las otras cuentan generalmente con la información necesaria para darles respuesta. Así se tendrían que revisar las condiciones de los trabajos de cuidado de personas de diferentes edades, con pertenencia a algún pueblo indígena o no, habitante de una comunidad del

norte, centro o del sur, con una posición de asalariada en el trabajo u otra posición, con el género de hombre o de mujer. Las tareas de cuidados desarrolladas por las mujeres y los hombres están entonces en relación con la clase social, la edad, la etnicidad, el color de piel o el lugar de residencia. En México, una forma de realizar un acercamiento a las desigualdades por razón de género y etnicidad que se pueden encontrar entre la población es a través del promedio de horas que mujeres y hombres, hablantes y no hablantes de lengua indígena, dedican al trabajo remunerado y no remunerado.

### PROMEDIO DE HORAS DE TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO POR SEXO Y CONDICIÓN DE HABLA DE LENGUA INDÍGENA, 2014

	POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA			POBLACIÓN NO HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA		
	MUJERES	HOMBRES	BRECHA	MUJERES	HOMBRES	BRECHA
Actividades para el mercado y bienes de autoconsumo	20.6	47.0	-26.4	33.6	52.4	-18.8
Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar	36.1	7.6	28.5	29.5	9.8	19.8
Actividades para el mercado y bienes de autoconsumo	30.6	12.2	18.4	28.6	12.4	16.2
Trabajo no remunerado como apoyo a otros hogares y trabajo voluntario	6.7	6.4	0.3	9.0	5.7	3.2
Total de trabajo no remunerado	73.4	26.2	47.2	67.1	27.9	39.2

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Tabulados básicos. México

Las grandes diferencias que se pueden observar en las condiciones del trabajo de cuidados a través del análisis desde la interseccionalidad, conducen a reflexionar sobre el papel del Estado en la garantía de los cuidados como un

derecho de todas las personas, por lo que las políticas que se diseñen deben responder a la variedad de realidades de la población.

## LOS CUIDADOS COMO DERECHO

El bienestar de las personas es una condición que se logra con los cuidados cotidianos, entre otros factores, por lo que en fechas recientes se ha convenido en considerar tales cuidados como inscrito en el conjunto de derechos ya reconocidos para la humanidad. De alguna manera, los cuidados han sido considerados por diversas disposiciones legales al hablar del derecho a la alimentación, a una vivienda, a la salud y a la educación:

**Los tratados y Pactos internacionales de Derechos Humanos no han incluido el “derecho al cuidado y a cuidar(se)”, sin embargo se puede afirmar que está incorporado en función de lo normado en cada uno de**

**los derechos sociales incluidos, que van desde el derecho a una alimentación de calidad y en cantidad suficiente hasta el desarrollo de sistemas de seguridad social amplios que incluyan a toda la población y no solamente a quienes estén asalariados, pasando por el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo (Pautassi, 2007: 40).**

Sin embargo, las discusiones actuales sobre los cuidados que se requieren para alcanzar el ejercicio de estos derechos ha conducido a reconocer que para ser garantizados, los cuidados también deben ser garantizados; en este sentido, Laura Pautassi (2007) sugiere universalizar la responsabilidad, la obligación, la tarea y los recursos necesarios para

<sup>7</sup> El 70% de la población de Oaxaca vive en condiciones de pobreza y el 62% está en condiciones de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (CONEVAL, 2016).)

el cuidado: “No se trata de promover únicamente una mayor oferta de cuidado –de por sí indispensable– sino universalizar la responsabilidad, la obligación, la tarea y los recursos necesarios para el cuidado. Será la única forma que trascienda los compromisos inmediatos y que se inserte como un derecho humano fundamental: el derecho a ser cuidado y a cuidar” (Pautassi, 2007: 41). El enfoque de derechos en los cuidados es trascendental cuando se vincula a la obligación del Estado de atender y garantizar el bienestar de la población, así como la responsabilidad que tiene de trabajar por lograr los cuidados que faciliten el derecho a la salud, la educación, la alimentación y la seguridad. La visión de los cuidados a partir de los derechos requiere del reconocimiento por parte de la sociedad (principalmente desde quienes los realizan: las

## LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE ESTADO, EMPRESAS, FAMILIAS Y COMUNIDAD

Vistos como un derecho, los cuidados se colocan bajo la tutela del Estado y esto significa la obligación de garantizarlos junto con la participación de los demás actores involucrados: las familias, las empresas y la comunidad. Las tareas por llevar a cabo y que corresponden a cada uno de estos cuatro actores no han sido definidas de manera uniforme; hasta el momento se dice que deben ser actores activos en los cuidados, lo que sería una oportunidad para la distribución equitativa de esta labor no solo entre mujeres y hombres, sino entre los demás actores involucrados. Una distribución de los trabajos de cuidados entre estos actores significaría su reconocimiento como un bien público que es necesario garantizar a partir de las políticas públicas, tema que aún está pendiente de incluir en las agendas gubernamentales.

### EL PAPEL DEL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO EN LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Los trabajos de cuidado no remunerados que incluyen la atención a infantes, a su salud y a la de otras personas, principalmente cuando están convaleciendo de algún problema, son actividades que significan un subsidio al sistema público de cuidado a la población. Ahí está una de las principales contribuciones económicas del trabajo de cuidados no remunerado: el ahorro en el presupuesto público. Es, además, una importante contribución al desarrollo de las comunidades por la atención al bienestar general de las y los integrantes de las familias y la sociedad, además de la garantía que ofrecen al sistema de producción mercantil al contar con fuerza de trabajo, lo que refiere no solo al trabajo de cuidados de los hombres trabajadores remunerados por las mujeres trabajadoras remuneradas y no remuneradas,

mujeres) de la importancia que tienen para la reproducción económica y social:

para cambiar el actual paradigma de las responsabilidades del cuidado por uno basado en los derechos de las personas, desde una perspectiva de corresponsabilidad social, es necesario contar con el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad del valor del trabajo de cuidado no remunerado, así como del derecho a recibir cuidado, y posicionar el trabajo de cuidado no como un tema privado, sino como un bien público global. Es decir, es necesario que se reconozca y garantice el cuidado como un derecho y por lo tanto como una dimensión de la política pública (ONU Mujeres-ILSB, 2016: 4)

Actualmente se reconoce la necesidad de redistribuir las labores del cuidado para avanzar hacia el logro de la igualdad sustantiva y para garantizar a las mujeres el pleno goce de sus derechos, algunos países de la región han estado impulsando acciones en este sentido, tanto desde el ámbito público como desde las organizaciones y redes de mujeres. Sin embargo, desde una perspectiva regional, el tema del trabajo de cuidado no remunerado aún no figura de manera consistente en las agendas ni en las políticas públicas para la igualdad de género (ONU Mujeres-ILSB, 2016: 4)

sino el trabajo que ellas desarrollan para cuidarse a sí mismas. En relación con los cuidados de la salud, Carrasco expresa: “Esos servicios, que con frecuencia pasan desapercibidos para la sociedad, proporcionan un gran aporte al sector público de salud pero también aumentan considerablemente el trabajo de las mujeres, repercutiendo negativamente en su tiempo de ocio, su salud, sus carreras laborales e ingresos. Todo esto consolida los roles tradicionales de hombres y mujeres, incrementado las desigualdades de género” (2008: 239).

## LA VISIÓN DE LA ECONOMÍA FEMINISTA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

La economía feminista es una corriente de pensamiento económico que redefine críticamente los conceptos de trabajo, fuerza de trabajo, desarrollo, sistema productivo y economía. A partir de estos cuestionamientos, identifica la ausencia en el análisis que realiza la ciencia económica de las actividades que realizan las mujeres en los hogares de manera no remunerada: los trabajos de cuidado. Debido a que las ciencias tuvieron un desarrollo androcéntrico, las actividades al interior de los hogares no fueron consideradas como económicas ni como creadoras de valor y, por tanto, quedaron excluidas del análisis económico de las corrientes de pensamiento predominantes. Entre los representantes de la economía clásica y marxista hubo alusiones a estas actividades: “identificaron la importancia de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero concentraron su atención sólo en la cuestión de los bienes salarios consumidos por los hogares, sin explorar el rol del trabajo doméstico en este proceso. Los clásicos asumieron como natural el modelo jerárquico del matrimonio y la familia con la autoridad investida en la figura del esposo/padre” (Rodríguez E., 2005: 3). Sin embargo:

“John Stuart Mill y Harriet Taylor reconocieron la importancia de la inserción de las mujeres en el mercado de empleo como elemento esencial para la distribución democrática de decisiones y responsabilidades al interior de los hogares”... “[En Marx] el desarrollo de su teoría del valor-trabajo reconoció como tal tanto al que resultaba productivo desde el punto de vista capitalista, como al que resultaba productivo desde un punto de vista social. Sin embargo, el énfasis estuvo puesto en el análisis del primero resultando marginal el estudio de las especificidades del segundo” (Rodríguez E., 2005: 3).

Sin duda, esta ponderación respondió a la atención de los hombres economistas a las actividades que realizaban los hombres y que fueron consideradas como más importantes para el desarrollo del sistema económico y social; es decir, para su reproducción.

La escuela marginalista invisibilizó por completo este aspecto. Considerando al trabajo exclusivamente

como un factor productivo que los individuos intercambian en el mercado, divorció su precio (salario) de cualquier proceso social o histórico. Relacionando el valor económico con la posibilidad y el deseo de intercambio, todo trabajo sin remuneración (o sin mercado) dejó de ser considerado como objeto de análisis. (Rodríguez E., 2005: 3).

Desde la propia teoría neoclásica sí existió una aproximación a la consideración del trabajo doméstico en la elección de los individuos a través de lo que se conoce como Nueva Economía del Hogar. (Rodríguez E., 2005:4).

La economía feminista analiza desde los años sesenta la complejidad de las vidas y del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados necesario para la reproducción social de personas. En este sentido, el aspecto que más se debate es la invisibilidad del trabajo doméstico, así como su papel determinante, primero, en la reproducción de la fuerza de trabajo; posteriormente, después de largas discusiones, como el “trabajo de cuidados” es necesario

para que la vida continúe, en relación a la organización del tiempo y del trabajo de los hogares, con una importante dimensión de género. Tanto las empresas como el sector público tienden a considerar la oferta de fuerza de trabajo y la continuidad de la vida humana como un dato; sin asumir la enorme cantidad de tiempo de cuidado que ello representa. Desde la economía feminista –o de una parte de ella– se insiste en la urgente necesidad de incorporar en los modelos macroeconómicos –así como en el diseño e implementación de políticas públicas– el trabajo familiar doméstico y el trabajo de cuidados; ya que, sin él, no sólo las personas, sino ni siquiera el mercado podría subsistir (Carrasco, 2006: 40).

La división sexual del trabajo asigna a las mujeres los trabajos de cuidado excluyéndolas del trabajo remunerado y/o de mejores remuneraciones<sup>8</sup>, lo que puede estar relacionado con la reproducción de la pobreza de las familias y la sociedad; pobreza que se puede ver agravada si intervienen otros rasgos de diferenciación como la etnicidad, la edad, el color de piel y el lugar de residencia. Este planteamiento

<sup>8</sup> Los problemas de las mujeres derivados de la asignación de tareas por sexo son aún más, como la pobreza de tiempo y la sobrecarga laboral, que afectan sus posibilidades de educación, participación política, recreación, descanso. En este documento ponemos énfasis en el trabajo remunerado por formar parte de las actividades de la esfera pública con más dificultades de acceso para ellas que, además, están relacionadas con el acceso a nuevas habilidades y capacidades, la socialización, la participación sindical y la toma de decisiones.



conduce, necesariamente, a considerar el ordenamiento de género como un aliado del sistema económico con sus características actuales de bajo crecimiento, que no genera empleos y mantiene insuficientes ingresos para vivir dignamente. La conjugación de ambos sistemas (económico capitalista y de género) organizan a la sociedad de manera que las asignaciones de género sirven de freno a la presión política que ejerce la exigencia del derecho a un empleo (solo

habrá que imaginar la presión que significaría la búsqueda organizada y colectiva de empleo por todas las mujeres en edad de trabajar). Así como el sistema económico facilita la reproducción del sistema de género al no abrir fuentes de empleo que puedan ser ocupados de manera igualitaria por mujeres y hombres y hacen permanecer a las mujeres en casa.

LA RESPUESTA PÚBLICA PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS.

Las políticas son las respuestas que los gobiernos ponen en marcha para resolver los problemas. En particular, los problemas que surgen de la división sexual del trabajo y que definieron los comportamientos, actividades, valoraciones y oportunidades de las mujeres y los hombres que derivaron en desigualdades, han tenido como respuesta la política para la igualdad, que ha tratado de intervenir en el acceso y ejercicio de todos los derechos de las mujeres y los hombres en igualdad de circunstancias. Las políticas se han diseñado según los momentos en que los problemas se han incorporado a la agenda pública; así, vimos que las políticas para garantizar el derecho al voto, a la educación y al trabajo fueron las que marcaron el inicio del conjunto de medidas que, hasta el momento, continúan siendo diseñadas para garantizar los derechos de las mujeres y los hombres de manera igualitaria. Son numerosas las políticas que hoy se discuten en los foros nacionales e internacionales, unas están relacionadas con el derecho de las mujeres a vivir sin violencia; otras, con su

participación política; y otras más con el reconocimiento del trabajo de cuidados como fundamental para el funcionamiento de la economía y la sociedad, por lo que se analizan sus características, entre ellas, los problemas que lo rodean. Entre los problemas identificados en el desarrollo del trabajo de cuidados es que: requiere de amplias jornadas, limita la participación en el mercado de trabajo que remunera las actividades y lo realizan fundamentalmente las mujeres. Es, entonces, un trabajo realizado de manera gratuita que facilita el ahorro de un actor que tiene la obligación de garantizar el acceso al empleo En este documento se examinarán las normas vinculadas al trabajo de cuidados que se han desarrollado en algunos países de América Latina bajo el entendido de que las normas, como parte de las acciones que los gobiernos realizan para responder a los problemas; esto es, como parte de las políticas, son detonadores de los programas y proyectos para resolver los asuntos públicos.

EL ALCANCE DE LAS NORMAS

En México se cuestiona ampliamente el cumplimiento de las leyes sobre diversas materias (penal, electoral, fiscal, de acceso a una vida libre de violencia, entre otras); este cuestionamiento se presenta en menor grado para otros países de América Latina, como Costa Rica, y todavía con menos fuerza en Uruguay. Parte de la explicación de este debate lo ofrece Alda Facio (1992) al exponer tres componentes de la normatividad cuando analiza el fenómeno legal, y aunque ella tiene como punto de partida la discriminación por motivos de género, los elementos que introduce facilitan la comprensión del cumplimiento de las leyes pues “el derecho ya no es sólo el conjunto de normas sino también las instituciones que las crean, las aplican y las tutelan” (Facio, 1992: 63), como se verá a continuación.

- 1. El componente formal-normativo (sustantivo). Es la creación, aplicación e interpretación de la ley tal como se encuentran escritas. Es la ley formalmente promulgada o generada.
- 2. El componente estructural. Es el contenido que le dan a las leyes, las instituciones que las crean, interpretan y aplican (legisladoras/es, cortes, oficinas administrativas, policía y demás funcionarias/os). Las leyes son efectivas y vigentes según lo no escrito por estas instituciones.
- 3. El componente político-cultural. Son los contenidos que la gente le da a las leyes y su aplicación por medio de las tradiciones, las costumbres, el conocimiento y el uso que se hace de ellas. Son leyes que no son formalmente promulgadas, pero son obedecidas por la mayoría (Facio, 1992: 64).

“Un derecho no es tal si solo está contemplado en el componente formal-normativo, o si está contemplado sin hacer referencia a una restricción en el componente político cultural, o si no puede ser exigido por la manera en que se

interpreta en el componente estructural” (Facio, 1992: 64). Adicionalmente, Facio señala cómo los tres componentes se relacionan entre sí de manera rotunda. Primeramente, sobre la influencia del componente político-cultural en el formal-normativo, menciona que las personas que hacen las leyes

son personas de carne y hueso que están impregnadas de actitudes, juicios y preconcepciones con respecto a las personas a quienes van dirigidas, especialmente cuando esas personas pertenecen al sexo femenino, a una raza/etnia discriminada, a un grupo minoritario, etc. [...además] el conocimiento y uso que la gente corriente y común haga de las leyes existentes irá demostrando a los legisladores qué leyes deben ser modificadas, cuáles derogadas, qué nuevas leyes se requieren y cómo deben ser redactadas para ser aceptadas” (Facio, 1992: 68).

La influencia del componente formal-normativo en el componente político cultural se observa en la conformación

de las actitudes y conductas que la gente común adopte. Por otra parte, su influencia en el componente estructural se observa al “dotar a la persona que [...] debe interpretar y aplicar la ley del poder de llenar los vacíos de la misma por medio de la analogía con otra y otras leyes formalmente promulgadas” (Facio, 1992: 71). El estructural en el componente formal-normativo influye a través de la interpretación o aplicación de una manera específica, lo que va “dando un significado a esa ley que podría ser más amplio o más restringido de lo que la o el legislador quiso al promulgarla [...] Si nunca o no muy frecuentemente se aplica una ley o un determinado aspecto de una ley, ellos también influye en el componente sustantivo al restarle vigencia o efectividad a la misma” (Facio, 1992: 71). El componente político-cultural tiene influencia en el estructural de manera semejante a la que ejerce en el formal-normativo, es decir, a partir del reconocimiento de que quienes hacen, combinan, aplican e interpretan las leyes son personas con valores, aprendizajes y comportamientos sobre las personas y sus conductas o necesidades.







# METODOLOGÍA

## E

El análisis de la política de cuidados, representada por las leyes diseñadas para la atención de los cuidados de las personas, tiene como punto de partida los planteamientos de la evaluación de diseño de la política que, según José Luis Osuna y otros autores (Osuna et al. s/f), refieren a la revisión de los elementos que justifican su necesidad y la forma en que se articula tanto en su sentido interior como exterior; en relación con la evaluación conceptual o de diseño, sostienen que tiene el objetivo de “analizar la racionalidad y coherencia de la política”, esto es, trata de verificar la bondad del diagnóstico socioeconómico realizado (evaluación de necesidades), constatar la existencia de objetivos claramente definidos y medibles, analizar su correspondencia con los problemas y examinar la lógica del modelo de intervención diseñado, tanto de forma interna al programa como en relación con otras políticas y programas (Osuna et al., s/f).

Carlos Bueno y José Luis Osuna mencionan que la evaluación de diseño además “contrasta la veracidad del diagnóstico que la justifica, juzga la definición de los objetivos, examina la correspondencia entre la realidad del contexto sobre el que se pretende intervenir y los objetivos que la estrategia política se propone alcanzar” (Bueno y Osuna, 2013). La evaluación de diseño cuenta con dos ámbitos de estudio: la pertinencia y la coherencia; en este sentido, se analizará la racionalidad (o pertinencia) a partir de relacionar la respuesta con el problema que se pretende resolver. Aquí es importante considerar el problema tal como lo conceptualizan las y los actores involucrados y cómo lo estamos considerando en este documento: como un problema de desigualdad en la distribución de los trabajos no remunerado y remunerado, que reproduce las desventajas de las mujeres en el ejercicio de sus derechos: educación, participación política, recreación,

deporte, arte, toma de decisiones y otros. Uno de los recursos analíticos fundamentales para el estudio de los problemas sociales es la categoría de Género. El género influye en el ejercicio de los derechos, de cualquiera de ellos, incluido el derecho al trabajo remunerado y al de cuidados, el derecho de decir “no” a los cuidados así como a ser cuidada/o. El punto de partida metodológico es el enfoque de género. La aplicación de la categoría de Género en los procesos de conocimiento y análisis de la realidad social, así como en la formulación de políticas, es una condición básica para alcanzar un desarrollo con igualdad en términos sociales y entre mujeres y hombres. Asimismo, al reconocer que el género y las desigualdades sociales que produce no solo se configuran por las características sexuales sino por otro conjunto de rasgos que hacen diferencias en el trato social, como la clase social, la edad, la etnicidad, la orientación y preferencia sexual, la condición de migración y el lugar de residencia, será importante observar si la normatividad considera estas diferencias para proponer las acciones que resuelvan el problema. La investigación se realizará con las perspectivas cualitativa y de revisión documental, de esta manera se logra obtener una imagen amplia de las políticas públicas que tienen incidencia en la distribución de los trabajos de cuidado y remunerado en la sociedad y las familias. La perspectiva cualitativa busca contar con el punto de vista de las personas que diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas relacionadas con los cuidados y el trabajo remunerado. Estudia las políticas en su contexto, tal y como son formuladas, intentando interpretarlas de acuerdo con los significados que tienen para las personas involucradas.



## LA REVISIÓN DOCUMENTAL

Incluye una revisión de las leyes y reglamentos que inciden en la distribución de los trabajos de cuidado y remunerado. Se considera la experiencia de cinco países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Uruguay. La finalidad es contar con las propuestas normativas que inciden en la distribución de los trabajos que deriven en equilibrios facilitadores de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado en México, entre ellos la participación de los

## HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS

Los marcos interpretativos consisten en reconocer que, frente a los problemas, como los de desigualdad de género, existen diferentes interpretaciones teóricas y operativas que marcan la respuesta que se dará para resolverlos (interpretaciones que son la unidad de análisis de la evaluación de diseño). Esto es, las interpretaciones que se hacen sobre el conocimiento que se va construyendo alrededor del género, su origen y sus consecuencias definen el planteamiento de los problemas y las intervenciones que se realizan para atenderlos.

La existencia de “marcos interpretativos” (policy frames) diferentes en relación con el problema de la desigualdad de género influye en la formulación de las políticas de igualdad la variedad de interpretaciones es enriquecedora, por otro lado, las maneras diversas de entender la igualdad de género en el nivel supra-estatal, estatal y sub-estatal, y por parte de distintos/as actores/as dentro de un mismo nivel, pueden distorsionar, en el proceso de implementación, los problemas y objetivos compartidos en la fase de formulación de las políticas de igualdad (Bustelo y Lombardo, 2005: 2 y 4).

Según Cobo,

## UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis es el conjunto de la legislación dirigida a atender los cuidados de las personas en los países seleccionados, con la finalidad de observar su pertinencia



hombres en los trabajos de cuidados, la participación del estado, las empresas y la comunidad a través del ofrecimiento de bienes y servicios, de manera que sea asumida como una responsabilidad compartida. Para encontrar tales propuestas se llevará a cabo su análisis a través de la herramienta denominada marcos interpretativos la que facilita el estudio de la pertinencia y coherencia de la política.



“Los paradigmas y marcos de interpretación de la realidad son modelos conceptuales que aplican una mirada intelectual específica sobre la sociedad y utilizan ciertos conceptos (género, patriarcado, androcentrismo, etc.) a fin de iluminar determinadas dimensiones de la realidad que no se pueden identificar desde otros marcos interpretativos de la realidad social” (Cobo, 2005: 254).

y coherencia respecto del problema social y de género que se expresa en la distribución del trabajo. Es el análisis de los principios de política pública en materia de derechos económicos con perspectiva de género, en particular del trabajo de cuidados no remunerado. Fueron seleccionadas las leyes que aluden directamente a bienes y servicios de cuidado para diversos grupos de población: niñas y niños, adolescentes, personas en edad de trabajar, personas mayores, personas con alguna discapacidad; son las normas vinculadas a los trabajos de cuidado que se plantean como respuesta a las necesidades de la población en relación con la salud, la educación y los cuidados en el ámbito laboral.





# ANÁLISIS DE LA POLÍTICA

## ARGENTINA



LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA DECRETO N°574 (2016)	Apruébese el "PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA", como herramienta para garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a 4 años de edad inclusive, en situación de vulnerabilidad social en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos, que será instrumentado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, tendrá por objetivos, la promoción y fortalecimiento de espacios de cuidado y abordaje integral de niñas y niños en su primera infancia, que garanticen una adecuada y saludable nutrición, así como la estimulación temprana y promoción de la salud, propiciando condiciones de participación activa en el ámbito familiar y comunitario que faciliten el proceso de crianza y desarrollo de niños y niñas, promoviendo el fortalecimiento intrafamiliar y comunitario.	Niños y niñas de 45 días a 4 años	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
DECRETO N.º 1202/2008 REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 26.233/07, REGULA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	Coordinar el trabajo interjurisdiccional en materia de los aspectos logísticos, administrativos y organizativos y todo otro que resulte pertinente para la preparación y organización de los Centros de Desarrollo Infantil, así como determinar y propiciar las medidas y actos que resulten necesarios para el cumplimiento del objetivo señalado (Art. 2).	Niños, Niñas, Mujeres y Familias	Mujeres y personas en situación de pobreza
LEY 26.233/2007 PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	Promover y regular los Centros de Desarrollo Infantil.	Niños de hasta 4 años	Personas en situación de pobreza
LEY 26.206/2008 LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL	Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.	Niños y adolescentes en edad escolar, jóvenes y adultos, mujeres embarazadas	Personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales, indígenas y personas con capacidades diferentes
LEY 26.061/2005 LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	Proteger en forma integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.	Niñas, niños, adolescentes y sus familias	Mujeres, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales, indígenas, afro-descendientes y personas con capacidades diferentes
LEY 24.714/1996 RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES	Instituir, con alcance nacional y obligatorio, un Régimen de Asignaciones Familiares en beneficio de los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia.	Menores de edad, hijos con discapacidad, mujeres embarazadas	Mujeres, personas en situación de pobreza y personas con capacidades diferentes

LEY	OBJETO	SUJETOS	CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
DECRETO 593/2003 RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES-MODIF. LEY 24.714	Art. 3° — Las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que tengan efectivamente abonadas las imposiciones mensuales al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes tendrán derecho al cobro de las siguientes prestaciones establecidas en el artículo 6° de la Ley 24.714: a) Asignación por Hijo, b) Asignación por Hijo con Discapacidad, c) Asignación Prenatal y d) Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, primaria y secundaria del Sistema Educativo Argentino.	Niños, niñas, familias e hijos con discapacidad.	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
LEY 25.724/2002 PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN NACIONAL	Crear el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional, destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza.	Niños de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza	Mujeres, personas en situación de pobreza y personas con capacidades diferentes
LEY 25.504 CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD	Certificación de la discapacidad, del grado y la naturaleza de la misma y las posibilidades de rehabilitación.	Personas con discapacidad	Familias
LEY 24.901 INSTITÚYESE POR LA PRESENTE LEY UN SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Acciones de prevención, asistencia, promoción y protección.	Personas con discapacidad	Familias
LEY 24716 LICENCIA POR MATERNIDAD SÍNDROME DOWN	El nacimiento de un hijo con Síndrome de Down otorgará a la madre trabajadora en relación de dependencia el derecho a seis meses de licencia sin goce de sueldo desde la fecha del vencimiento del período de prohibición de trabajo por maternidad.	Mujeres, niñas y niños con síndrome Down	Familias
LEY 24.714 RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES POR HIJOS CON DISCAPACIDAD	Consistirá en el pago de una suma mensual que se abonará al trabajador por cada hijo que se encuentre a su cargo en esa condición, sin límite de edad, a partir del mes en que se acredite tal condición ante el empleador.	Trabajadoras y trabajadores, hijas e hijos con síndrome Down	Familias
LEY 24.308 QUE REGLAMENTA LAS CONCESIONES DE PEQUEÑOS COMERCIOS	Establece la prioridad en el otorgamiento de concesiones en las reparticiones públicas o privadas a los ciegos y disminuidos visuales.	Personas con discapacidad	Familias
LEY 24.147 TALLERES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	Trabajo-talleres protegidos de producción-trabajador discapacitado; formación profesional-contrato de trabajo por tiempo indeterminado jornada de trabajo-feriados-vacaciones-licencias especiales remuneración-accidentes de trabajo-enfermedad profesional-regímenes jubilatorios especiales-aportes jubilatorios.	Personas con discapacidad	Familias
LEY 22.431 DE SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS	Otorgar a las personas discapacitadas atención médica, educación y seguridad social.	Personas con discapacidad	Familias
LEY 20.888	Otorgamiento del beneficio jubilatorio a ciegos.	Personas con discapacidad	Familias
LEY 19.279. AUTOMOTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Facilitar la adquisición de automotores para uso personal, a fin de que ejerzan una profesión, o realicen estudios, otras actividades y desarrollen una normal vida de relación, que propendan a su integral rehabilitación dentro de la sociedad.	Personas con discapacidad	Familias
LEY 19.032. INSSJP	Creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Programa de Atención Médica Integral y otras prestaciones (PAMI).	Adultos mayores	Familias
LEY 20.744 DE CONTRATO DE TRABAJO	Licencia por maternidad y paternidad, 90 días para la madre y 2 para el padre.	Trabajadoras y trabajadores	Familias

El análisis de la pertinencia y de la coherencia de la legislación argentina desde los marcos interpretativos tiene los siguientes resultados:

**Pertinencia de la legislación argentina frente al problema de la asignación del trabajo de cuidados no remunerado a las mujeres, lo que conduce a las mujeres a no ejercer sus derechos y a las familias a permanecer en condiciones de pobreza y sin cambio en la división sexual del trabajo.**  
**¿Las leyes consideran el trabajo de cuidados no remunerado como un problema de desigualdad de género que coloca en una desventaja aún mayor a las mujeres ya que al ser casi exclusivas responsables de este trabajo las excluye de otros derechos?**  
No, en la exposición de las leyes, no se observa alusión a los trabajos de cuidado que realizan las mujeres como un problema de desigualdad de género que las coloca en desventaja frente al ejercicio de otros derechos.

**¿Lo representan solo como un problema que afecta a los sectores de menores ingresos y, por tanto, el Estado debe intervenir?**

La legislación que comprende los ámbitos de cuidado respecto a la educación y la salud presenta información orientada a cuatro ejes:  
*Las Leyes de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; educación nacional; nutrición y alimentación nacional; asignaciones familiares; promoción y regulación de los centros de desarrollo infantil; y el Plan Nacional de Primera Infancia,* cubren la demanda de atención a esta población desde los 45 días de nacido; además, con la ejecución de estas leyes se beneficia a mujeres en situación de pobreza.  
Con los planteamientos establecidos en las leyes se observa la ausencia de la descarga de trabajo de cuidados de las mujeres y de los hombres con estas acciones; esto es, el problema de los cuidados se considera solamente por la afectación a la población en condiciones de pobreza y no se considera la división sexual del trabajo como una causa estructural de la asignación de los trabajos de cuidado a las mujeres y que incluye al conjunto de familias. Es decir, la atención a la infancia se considera un problema de deficiencia en los recursos monetarios y no de asignación de tareas sesgada por la visión familista y de género, en donde los cuidados corresponden a las familias y particularmente a las mujeres. Un ejemplo es el **Plan nacional de primera infancia. Decreto 574/2016** de abril de 2016, en donde se observa que en el Artículo 7 de la Ley N.º 26.061, se establece que “la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute

pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías [...]”, y que “los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad”.  
Los cuidados que se promueven a través del estado tienen cobertura para quienes están en condiciones de pobreza y no como un derecho universal que ofrece el desarrollo adecuado a la población infantil: “El plan nacional tiene como objetivo principal garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de cuarenta y cinco (45) días a cuatro (4) años, inclusive en situación de vulnerabilidad social, en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos”.  
Por su parte, las leyes correspondientes al sistema de prestaciones básicas de atención integral a personas con discapacidad; el otorgamiento jubilatorio a personas ciegas; los talleres para personas discapacitadas[sic]<sup>9</sup>; la licencia por maternidad por síndrome Down; y el régimen de asignaciones familiares por hijas/os con discapacidad atienden a todas las personas en esa situación y, colateralmente, sus familias resultan apoyadas.  
Las personas adultas mayores son titulares de derechos individuales y de grupo, deben disfrutar del ejercicio de derechos sociales para vivir con seguridad y dignidad, lo que exige un papel activo del Estado y la sociedad. En Argentina no existe una ley nacional que proteja específicamente a las personas adultas mayores, no obstante, uno de los más importantes cambios durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández es la ampliación de la cobertura provisional en el año 2005 y otra en 2015, ésta última colocó al país en el segundo lugar de mayor cobertura jubilatoria en América Latina y amplió los fondos de ayuda social con una gran cantidad de programas sociales.  
Las licencias en relación con maternidad y paternidad (90 días para ella y dos días para ellos, según la **Ley 20.744 de Contrato de Trabajo**) en la ley de contrato de trabajo son un derecho que en Argentina sólo una parte de las madres y padres pueden gozar, ya que la cantidad de días otorgados para el cuidado de la o el recién nacido varía según la categoría ocupacional, el sector productivo e inclusive la localización geográfica. Quienes son trabajadoras y trabajadores autónomos o se desempeñan en el sector informal no cuentan con este derecho.



<sup>9</sup> El término más adecuado es personas con discapacidad.



¿Se observa en la legislación que refieren a los problemas/especificidades que se plantean desde una mirada interseccional?

Se observa que el periodo de atención a la infancia es solo hasta los cuatro años, lo que dificulta la atención de los cuidados después de esta edad. Aunque no se mencionan los grupos diversos que pueden existir, como son la pertenencia a pueblos originarios, sí se considera la atención según demandas de las familias y las comunidades donde viven. El **Decreto N.º 1202/08, reglamentario de la Ley N.º 26.233**, “estipuló en el Artículo 2 del Anexo, aprobado por el Artículo 1, que los Centros de Desarrollo Infantil estarán destinados a niños y niñas entre cuarenta y cinco (45) días y cuatro (4) años de edad inclusive, y formularán su proyecto institucional contemplando necesidades y demandas de las familias y comunidades en las que se encuentren insertos”. Las acciones para personas con alguna discapacidad son universales y las consideradas para las personas mayores ampliaron su cobertura para garantizar una pensión a todas y todos.

¿Consideran al trabajo de cuidados no remunerado como un obstáculo para la participación de las mujeres en el trabajo remunerado?

No, la normatividad está formulada a partir de la comprensión del problema de cuidados en un contexto de deficiencia de ingresos y dependencia respecto de los cuidados. No se identifica como raíz del problema la división sexual del trabajo, las desventajas de la asignación casi exclusiva de los trabajos de cuidado a las mujeres (niñas y adultas) y las consecuencias que tiene esta asignación en el acceso al trabajo remunerado. La información revisada sobre la legislación argentina sobre cuidados para las personas permite observar que es una propuesta limitada en términos de la concepción de cuidados, ya que se considera como una responsabilidad solo de las familias, con el apoyo del Estado, para la formulación de las políticas para asegurar que podrán responder a sus diferentes integrantes que están en condición de dependencia y, en relación con la infancia, a las que están en condiciones de pobreza. La concepción del problema se ve limitado a los ingresos deficientes y la dependencia de los cuidados y no a un trabajo que desarrollan principalmente las mujeres y que debe ser asumido de manera corresponsable para garantizarles el ejercicio de los derechos de manera igualitaria respecto a los hombres, incluido el derecho al trabajo que les facilitaría resolver sus necesidades inmediatas. La normatividad relacionada con los trabajos de cuidado en Argentina no tiene perspectiva de género, no es pertinente respecto de la problemática de asignación de tareas de cuidado con sesgos de género

que limita a las mujeres en el acceso y ejercicio de otros derechos como la formación, la recreación, el descanso, la participación política, la toma de decisiones. El enfoque de derechos se reduce, por una parte, a los derechos de la niñez en condiciones de vulnerabilidad social con la finalidad de garantizar igualdad de oportunidades (con respecto a sus pares en condiciones de no vulnerabilidad), en el acceso a los cuidados para la salud, la educación, la estimulación temprana, la nutrición y, por otra, a las personas en condición de dependencia como las mayores, con alguna discapacidad o con alguna enfermedad.

Coherencia de las acciones propuestas en la ley con los objetivos de reconocimiento de los cuidados de las personas como trabajo asignado a las mujeres que no les facilita el ejercicio de otros derechos como el trabajo remunerado, por lo que es necesario la modificación de la división sexual del trabajo.

¿Qué solución ofrecen a los sesgos de género en la asignación de estos trabajos?

Ninguna, las acciones tomadas para resolver las necesidades de cuidados de las personas no fueron diseñadas para solucionar; además, los sesgos de género en la asignación de los trabajos de cuidado a las mujeres. Los servicios de cuidado para la infancia se desarrollan a través de los Centros de desarrollo infantil regulados a través de la Ley de Centros de Desarrollo Infantil N.º 26.233 que consideran como objetivo: “brindar los cuidados adecuados e imprescindibles, complementando, orientando y coadyuvando en su rol, a las familias desde una función preventiva, promocional y reparadora” (Decreto 1202/2008 que aprueba la reglamentación de la Ley de centro de Desarrollo Infantil). La ley 24.901 sobre discapacidad contiene los servicios que otorgarán el “Sistema de Obras Sociales” para las personas con discapacidad y son las prestaciones preventivas, las de rehabilitación, las terapéuticas educativas, las educativas y las asistenciales. En este conjunto de acciones las familias son responsables de la participación de las personas con discapacidad en los servicios que ofrece el sistema de Obras Sociales dirigidas a estas personas, de transportarlas a los lugares donde se obtienen los servicios; sin embargo, si no tienen medios para transportarlas, se les ofrece también un vehículo. En el Capítulo VI se mencionan los sistemas alternativos al grupo familiar: “Artículo 29: En concordancia con lo estipulado en el Artículo 11 de la presente ley, cuando una persona con discapacidad no pudiese permanecer en su grupo familiar de origen, a su requerimiento o el de su representante legal, podrá incorporarse a uno de los sistemas alternativos al grupo familiar, entendiéndose por tales a: residencias, pequeños hogares y hogares”.

En el **Artículo 4 de la Ley 22.431** sobre el sistema de Protección integral de los discapacitados [sic] se mencionan los servicios a los que tendrán derecho: “El Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de las obras sociales, en la medida que aquellas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, los siguientes servicios:

- a) Rehabilitación integral, entendida como el desarrollo de las capacidades de la persona discapacitada.
- b) Formación laboral o profesional.
- c) Préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual.
- d) Régimenes diferenciales de seguridad social.
- e) Escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios previstos gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no puedan cursar la escuela común.
- f) Orientación o promoción individual, familiar y social”.



Estas acciones que, sin duda, garantizan derechos para las personas con discapacidad podrían tener efectos positivos para la disminución de la carga laboral de las mujeres que cuidan familiares con discapacidad, ya que contar con los servicios escolares, de rehabilitación y de inserción laboral resta tiempo dedicado a esas/os familiares. Solo se tendría que garantizar, además, el servicio de transporte que se mencionó en la **Ley 24. 901**. Las acciones dirigidas a las personas mayores se circunscriben a las asignaciones familiares por régimen contributivo (jubilaciones y pensiones), no contributivo por invalidez y no contributivo de carácter universal (**Ley 24.714** modificada en abril de 2016). Por otra parte, en 2003 se promulgó la **Ley 25.724** correspondiente al Programa de nutrición y alimentación nacional “destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70

años en situación de pobreza”, con lo cual se trataría de atender esta necesidad básica de las personas a través de transferencias en dinero. Desde ese año y hasta 2016 se mantuvo una política de garantía de los derechos a las personas mayores a través de acciones de atención a la salud, el desarrollo social, la cultura, el turismo y la educación (Plan Nacional de las personas mayores 2012-2016). Como se mencionó al inicio son acciones diseñadas para responder a los derechos de las personas dependientes y en condiciones de pobreza que, con seguridad, tienen efectos en los tiempos de cuidado que las mujeres les dedican; sin embargo, no están dirigidas a resolver la desventaja que significa para las mujeres la división sexual del trabajo en el acceso y ejercicio de sus derechos.

¿Consideran la participación de los hombres en la realización de estos trabajos?

No existe alusión a la participación igualitaria de mujeres y hombres en los trabajos de cuidados de las personas.

¿Consideran la participación de las empresas y de la comunidad?

No existe alusión a la participación de las empresas y la comunidad en los trabajos de cuidado de las personas

¿Cuál es la forma de participación del Estado?

La participación del Estado se encuentra en la elaboración de las leyes, reglamentos y el otorgamiento de servicios de cuidado de la niñez, las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, la atención a las y los trabajadores que solicitan una licencia de maternidad y paternidad.

¿Quién elaboró las normas y es(son) responsable(s) del problema?

En relación con las instituciones involucradas, las acciones dirigidas a la infancia fueron propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que involucra al Ministerio de Desarrollo Social y a la Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios. Las instituciones responsables para definir las acciones que garanticen los derechos de las personas con discapacidad son: la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Red para los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); las acciones, como se observó antes, son universales. Respecto de la atención a las personas mayores, el gobierno de este país se ha adherido a distintos protocolos



internacionales en relación con su cuidado, entre éstos a la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en la que se adoptó el Plan de Acción Internacional de Viena y la III Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe, en donde los estados miembros de la CEPAL adoptaron la Carta de San José de Costa Rica sobre los Derechos de las Personas Mayores. El Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados, el Plan Nacional de las Personas Mayores de la Dirección Nacional de Políticas para los Adultos Mayores en el Ministerio de Desarrollo Social, cumplen un papel fundamental en beneficio de dicha población.

Estos actores participantes en las acciones de cuidado de la infancia, las personas con discapacidad y las mayores expresan una responsabilidad del Estado para otorgar servicios de cuidado a estos tres grupos de la población, lo que significa posibilidades para las mujeres de disminuir cargas de trabajo; sin embargo, no se enuncian principios de modificación de la división sexual del trabajo ya que son concepciones de los cuidados que otorgan la responsabilidad a las familias (y con esto a las mujeres, que dentro de las familias asumen este trabajo), por lo que se mantienen los sesgos de género en la asignación de tareas de cuidado, así como menores oportunidades de las mujeres para ejercer otros derechos, además de considerar acciones para la infancia y las personas mayores de cobertura para las personas en condiciones de pobreza y no como derechos para toda la población como si lo consideran para las personas con discapacidad.

Las normas laborales tienden a centrarse en demandas de tiempo de cuidado muy limitadas y relacionadas con la protección de la madre trabajadora en el período de gestación, alumbramiento, posparto y lactancia, y regularmente no consideran las necesidades de los infantes receptores de cuidado.

¿Quién tiene voz en la definición del problema y de la solución?

Además de las dependencias gubernamentales señaladas anteriormente, la OIT interviene en la medida que sus convenios sean asumidos por la administración nacional. Las acciones, como se mencionó en el punto sobre pertinencia, están en correspondencia con los objetivos a alcanzar por las leyes: los cuidados de las personas, sin embargo, tienen visión familista, en el caso de los otorgados a la infancia son acciones y actores que reproducen la división sexual del trabajo y delegan en las mujeres los cuidados de este grupo ya que, al señalar la responsabilidad de las familias en su atención y la ausencia de menciones a la participación de los hombres, permanece la asignación de estos trabajos a las mujeres; los que van dirigidos a las personas con discapacidad son de mayor intervención del



Estado y pueden hacer posible solo la menor carga de trabajo de las mujeres, aunque no la modificación de la división sexual del trabajo. Por otra parte, la falta de mención sobre las obligaciones del Estado, de las empresas, la comunidad y los hombres de las familias en los cuidados de las personas también hará que se reproduzca la asignación a las mujeres del trabajo necesario para garantizar los cuidados. Solo los cuidados de las personas con discapacidad son considerados universales y no se observa una discusión sobre el derecho a los cuidados de toda la población.

Se puede concluir que la legislación argentina no cuenta con una agenda de cuidados que pretenda involucrar a los actores que deben intervenir en los trabajos de cuidado (Estado, empresas, familias y comunidad), ya que identifica el problema de cuidados como exclusivo de las familias (en particular de las mujeres, que son quienes lo realizan), para las personas dependientes y en condiciones de pobreza. Son políticas de tipo a, según los criterios de Batthyány: políticas de corto plazo que tienden al asistencialismo y no consideran el seguimiento de sus resultados.

BRASIL

LEY	OBJETO	SUJETOS	CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
LEY 13257 /2016 LEY DE PRIMERA INFANCIA. MODIFICA LA LEY 8069 DEL 13 DE JULIO DE 1990, ESTATUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	La presente Ley establece los principios y directrices para la formulación e implementación de políticas públicas para la primera infancia en cuenta la especificidad y pertinencia de los primeros años en el desarrollo del niño y el desarrollo humano, de acuerdo con los principios y directrices de ley 8069 de 13 de julio, 1990 (Estatuto de los Niños y adolescentes).	Niños, niñas y adolescentes	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
LEY 13146, DEL 6 DE JULIO DE 2015, QUE ESTABLECE LA LEY BRASILEIRA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ESTATUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 2015-07-06	Establece la Ley Brasileira de Inclusión de las Personas con Discapacidad (Estatuto de las Personas con Discapacidad).	Personas con discapacidad Política económica y social; No-discriminación	Familias
LEY 13109, DEL 25 DE MARZO DE 2015, QUE ESTABLECE LICENCIAS POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y ADOPCIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 2015-03-25	Establece licencias por maternidad y adopción, medidas de protección de la maternidad para mujeres embarazadas y licencia por paternidad en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Asimismo, garantiza a la mujer militar embarazada el derecho a cambiar de función cuando sus condiciones de salud así lo exigieran.	Mujeres; Categorías especiales de trabajadores	Familias
LEY 13.010. /2014 MODIFICA LA LEY N.º 8069 DE 1990, ESTATUTO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA ESTABLECER EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A SER EDUCADO Y CUIDADO SIN EL USO DEL CASTIGO FÍSICO O TRATOS CRUELES O DEGRADANTES.	(Art.18 bis) "El niño y el adolescente tienen derecho a ser educado y cuidado sin el uso del castigo físico o tratos crueles o degradantes, como formas de corrección, la disciplina, la educación o cualquier otra excusa, por los padres, por los miembros de la familia ampliada, por los ejecutores responsables, por parte de funcionarios públicos de medidas educativas o de cualquier persona en el cargo de cuidar de ellos, el tratamiento de ellos, educarlos y protegerlos, párrafo único a los efectos de esta Ley.	Niños, niñas y adolescentes	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
LEY 12796/2013 MODIFICACIONES A LA LEY 9.394 DE 1996, QUE ESTABLECE LAS DIRECTRICES Y BASES DE LA EDUCACIÓN NACIONAL	Modificaciones a la Ley 9.394, de 20 de diciembre de 1996, que establece las directrices y bases de la educación nacional, para proporcionar a la formación de profesionales de la educación y de otras medidas.	Menores de edad de cuatro (4) a diecisiete (17) años	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
ORDENANZA 1.459/2011 RED CIGÜEÑA	Establecer dentro del Sistema de Salud la "Red Cigüëña".	Niños, mujeres embarazadas y madres	Mujeres, indígenas y afro-descendientes
LEY 11.947/2009 DIRECTRICES DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	Disponer sobre la atención de la alimentación escolar y el Programa "Dinero Directo en la Escuela" para los alumnos de educación básica.	Estudiantes de enseñanza básica pública matriculados en guarderías, preescolar, escuelas primarias y secundarias	Personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
DECRETO 8690, DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008, QUE INSTITUYE EL PROGRAMA DE LICENCIA DE MATERNIDAD Y ADOPCIÓN, ESTABLECE LOS CRITERIOS DE ADHESIÓN AL PROGRAMA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 2008-12-11	Dispone que serán beneficiarias del Programa las servidoras públicas federales de la Administración Pública Federal Directa, Autárctica y Fundacional. Establece que dicha prórroga se garantizará hasta el final del primer mes después del parto y tendrá una duración de sesenta días.	Mujeres. Protección de la maternidad	Niñas y niños
DECRETO 6481/2008 REGULA LOS ARTÍCULOS 3, INCISO D Y 4 DE LA CONVENCIÓN 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) QUE TRATA DE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN.	Se aprueba la lista de las peores formas de trabajo infantil (Lista TIP) en forma de anexo, de conformid ad con lo dispuesto en los artículos 3, "d", y 4 de la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, aprobado por el Decreto Legislativo N º 178, de 14 de diciembre de 1999 y promulgada por el Decreto N º 3597 del 12 de septiembre de 2000.	Menores de 18 años	
LEY 1770/2008 CREA EL PROGRAMA EMPRESA CIUDADANA, PARA LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE MATERNIDAD MEDIANTE LA CONCESIÓN DE INCENTIVOS FISCALES, Y SE MODIFICA LA LEY 8.212, DE 1991	Se crea el Programa Ciudadano Empresarial, destinado a extender por sesenta (60) días de duración del permiso de maternidad propuesta del artículo XVIII del caput arte. 7 de la Constitución Federal. § 1 La extensión se concederá al empleado de la persona jurídica para unirse al programa, a condición de que el trabajador requiere que al final del primer mes después del parto, y concedió inmediatamente después del permiso de maternidad de disfrute que es la sección XVIII del caput arte. 7 de la Constitución Federal.	Niños/as, mujeres	Mujeres y personas en situación de pobreza



ANÁLISIS DE LA POLÍTICA			
LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
LEY 11.346/2006 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	Crear el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), con el fin de garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada y otras disposiciones.	Población en general	Personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales, indígenas y afro-descendientes
LEY 10.836/2004 CREA EL PROGRAMA BOLSA DE FAMILIA Y OTRAS MEDIDAS	Unificar los procedimientos de gestión y ejecución de las acciones de transferencia de renta del Gobierno Federal, especialmente del Programa Nacional de Renta Mínima vinculado a la Educación (Bolsa Escuela), el Programa Nacional de Acceso a la Alimentación (PNAA), el Programa Nacional de Renta Mínima vinculado a la Salud (Bolsa Alimentación), el Programa Auxilio-Gas y el Catastro Único del Gobierno Federal.	Hogares en situación de pobreza extrema, mujeres embarazadas, madres lactantes, niños, familias y adolescentes	Mujeres y personas en situación de pobreza
LEY 10.880/2004 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR	Establecer el Programa Nacional de Apoyo al Transporte Escolar (PNATE).	Niños y jóvenes de educación básica pública	Personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
LEY 10.689/2003 PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	Crear Programa Nacional de Acceso a la Alimentación (PNAA).	Familias	Mujeres y personas en situación de pobreza
LEY 10710, DEL 5 DE AGOSTO DE 2003, QUE MODIFICA LA LEY 8213, DEL 24 DE JULIO DE 1991, SOBRE LOS PLANES DE BENEFICIOS DE LA PREVISIÓN SOCIAL.2003-08-05	Restablece el pago, por parte de la empresa, del salario de maternidad que se debe a la empleada asegurada, embarazada, durante 120 días, comenzando en el período entre 28 días antes del parto y la fecha en que este ocurra.	Mujeres Protección de la maternidad	Niños y niñas
ESTATUTO DEL ANCIANO LEY 10741, DEL 1 DE OCTUBRE DE 2003	Destinado a regular los derechos asegurados a las personas de 60 (sesenta) años y más.	Personas adultas mayores	Familias
DECRETO 3298, DE 20 DE DICIEMBRE DE 1999, POR EL QUE SE REGLAMENTA LA LEY 7853, DE 24 DE OCTUBRE DE 1989, QUE DISPONE SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS, SE CONSOLIDAN LAS NORMAS DE PROTECCIÓN Y SE DICTAN OTRAS MEDIDAS. 1999-12-20	La política nacional de integración de las personas con deficiencias comprende el conjunto de orientaciones normativas que pretenden asegurar el pleno ejercicio de los derechos individuales y sociales de dichas personas. Aborda, entre otras cuestiones, los principios, las directrices, los objetivos, los instrumentos, los aspectos institucionales, la igualdad de oportunidades (salud, acceso a la educación, habilitación y rehabilitación profesional, acceso al trabajo, cultura, deporte, turismo y ocio), la política de capacitación de profesionales especializados, la accesibilidad a la administración pública federal y el sistema integrado de informaciones.	Trabajadores con discapacidad; Igualdad de oportunidades y de trato; Educación, orientación y formación profesionales	Familias
RESOLUCIÓN MPAS/INSS 630, DEL 20 DE OCTUBRE DE 1998, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS ACCIONES A EMPRENDER CON EL FIN DE GARANTIZAR LA RESERVA DE PUESTOS DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS, DESTINADAS A BENEFICIARIOS REHABILITADOS O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS REHABILITADAS.1998-10-20	Establece el porcentaje de puestos de trabajo que se deberán de reservar en función del número total de empleados. Excluye a la administración pública del ámbito de aplicación. Establece sanciones para los infractores	Personas con discapacidad, igualdad de oportunidades y trato	Familias
LEY 9.394/1996 DIRECTRICES BASE DE LA EDUCACIÓN NACIONAL	Establecer las directrices base de la educación nacional.	Niños, jóvenes y adultos	Personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales, indígenas, afro-descendientes y personas con capacidades diferentes
LEY 8842 DE 1994. DECRETAR SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL DEL ANCIANO, CREA EL CONSEJO NACIONAL DEL ANCIANO Y OTRAS RESOLUCIONES	La política nacional del anciano tiene por objetivo asegurar los derechos sociales del anciano, creando condiciones para promover su autonomía, su integración y participación en la sociedad. Se considera anciano, a los efectos de esta ley, la persona mayor de sesenta años de edad. Goza de todos los derechos fundamentales inherentes a la persona humana.	Adultos mayores	Familias
LEY 8.069/1990 ESTATUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	Establecer la protección integral del niño y del adolescente.	Niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas	Mujeres, personas en situación de pobreza y personas con capacidades diferentes
LEY 7644 POR LA QUE SE REGULA LA ACTIVIDAD DE LA MADRE SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.1987-12-18	Para los efectos de esta ley, considérese "madre social" la que, dedicándose a la asistencia del menor abandonado, ejerce su actividad social dentro del sistema de casas hogares	Mujeres	niñas y niños, personas en situación de pobreza

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
DECRETO 75207 POR EL QUE SE REGLAMENTA LA LEY 6136 DEL 7 NOV. 1974 QUE INCLUYÓ EL SALARIO DE MATERNIDAD ENTRE LAS PRESTACIONES DE LA PREVISIÓN SOCIAL. 1975-01-10	Se reglamenta la ley 6136, del 7 nov. 1974 que incluyó el salario de maternidad entre las prestaciones de la previsión social.	Mujeres Protección de la maternidad	
LEY 6136 POR LA QUE SE PREVEN LOS SUBSIDIOS DE MATERNIDAD COMO PARTE DE LAS PRESTACIONES DE LA PREVISIÓN SOCIAL.1974-11-07	Se prevén los subsidios de maternidad como parte de las prestaciones de la previsión social.	Mujeres Protección de la maternidad	
LEY 13287, DE 11 DE MAYO DE 2016, QUE AÑADE EL ARTÍCULO 394-A A LA CODIFICACIÓN DE LAS LEYES DEL TRABAJO (CLT), APROBADA POR EL DECRETO-LEY 5452, DEL 1 DE MAYO DE 1943, 2016-05-11	La citada ley añade el Artículo 394-A a la Codificación de las Leyes del Trabajo (CLT), aprobada por el Decreto-Ley 5452, del 1 de mayo de 1943, prohibiendo el trabajo de mujeres embarazadas o en lactancia en actividades, operaciones o lugares insalubres.	Mujeres Protección de la maternidad	Niños y niñas
LEY 12812 DEL 16 DE MAYO DE 2013 QUE MODIFICA LA CODIFICACIÓN DE LAS LEYES DEL TRABAJO, APROBADA POR EL DECRETO-LEY 5452, DEL 1 DE MAYO DE 1943. 2013-05-16	Protección de la maternidad. Agrega el Artículo 391-A a la Consolidación de las Leyes del Trabajo para disponer sobre la estabilidad provisoria de la embarazada, prevista en el inciso b del número II del Artículo 10, del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias.	Mujeres	Niños y niñas
LEY NÚM. 10421, DE 15 DE ABRIL DE 2002, SOBRE LICENCIA POR MATERNIDAD.2002-04-15	Extiende a la madre adoptiva el derecho a la licencia y salario por maternidad, modificando la Codificación de las Leyes del Trabajo, aprobada por el Decreto-Ley 5452, del 1 de mayo de 1943 y la Ley núm. 8213, del 24 de julio de 1991.	Mujeres, Protección de la maternidad	Niños y niñas
LEY NÚM. 8861 DE 25 DE MARZO DE 1994, POR LA QUE SE DA NUEVA REDACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 387 A 392 DE LA CODIFICACIÓN DE LEYES DEL TRABAJO, SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 25 DE LA LEY 8212 DE 24 DE JULIO DE 1991 Y LOS ARTÍCULOS 39, 71, 73 Y 106 DE LA LEY 8213 DE 24 DE JULIO DE 1991, TODOS REFERIDOS A LA LICENCIA POR MATERNIDAD.1994-03-25	Se refiere, entre otras cosas, a la inscripción de la asegurada especial, al por ciento de la contribución en algunos casos, al salario maternidad de la empleada del hogar.	Mujeres, Protección de la maternidad	

Pertinencia de la legislación brasileña frente al problema de la asignación del trabajo de cuidados no remunerado a las mujeres, lo que conduce a las mujeres a no ejercer sus derechos y a las familias a permanecer en condiciones de pobreza y sin cambio en la división sexual del trabajo.

¿Las leyes consideran el trabajo de cuidados no remunerado como un problema de desigualdad de género que coloca en una desventaja aún mayor a las mujeres, ya que al ser casi exclusivas responsables de este trabajo las excluye de otros derechos?

No, en la exposición de las leyes no se observa alusión a los trabajos de cuidado que realizan las mujeres como un problema de desigualdad de género que las coloca en desventaja frente al ejercicio de otros derechos. Sin embargo, mencionan la participación de los hombres, la comunidad y las empresas en tales tareas.

¿Lo representan solo como un problema que afecta a los sectores de menores ingresos y, por tanto, el Estado debe intervenir?

No. Las leyes más destacadas que se refieren a la protección de la niñez y adolescencia en Brasil son: **Ley 13.257** de Primera Infancia, **Ley 13.010**, Estatuto de Niños y Adolescentes que impide el castigo físico, Ley 12.796, que establece las directrices de la Educación Nacional, **Ordenanza 1459** establece el Sistema de Salud “Red Cigüeña”, **Ley 11.947** Directrices de la Alimentación Escolar, **Ley 10.880** Programa Nacional de Apoyo al Transporte Escolar, y **Ley 8069** Estatuto de la Protección Integral del Niño y el Adolescente, que es de amplia cobertura para la promoción y protección de estos derechos en donde están incluidos todos los grupos sociales, como se verá en el Artículo 3 señalado más adelante. En la **Ley 13.257** de Primera Infancia (promulgada en marzo de 2016) se establece que: “Las políticas y los programas

gubernamentales de apoyo a las familias, incluyendo visitas a domicilio y programas de promoción de la paternidad y maternidad responsables, se buscará la coordinación de la salud, la nutrición, la educación, el bienestar social, la cultura, el trabajo, la vivienda, medio ambiente y los derechos humanos, entre otros, con miras al pleno desarrollo del niño. “1) Los programas están dirigidos a fortalecer la familia en el ejercicio de su responsabilidad en la función y la educación de sus hijos en las actividades de la primera infancia, promueven al niño -centrado, familia- centrado y basado en la comunidad” (Artículo 14).

En este artículo se considera a los hombres en relación con la responsabilidad con su familia, aunque no es claro qué tareas le corresponden; por otra parte, se alude al fortalecimiento de la familia en su papel de responsable fundamental de los cuidados con apoyo de políticas gubernamentales, lo que hace permanecer la visión familista de los cuidados a pesar de la mención que se hace de la comunidad ya que tampoco se explicitan las tareas que ésta tendría.

Las personas con discapacidad se encuentran protegidas por la **Ley 13.146** de Inclusión de las Personas con Discapacidad, el **Decreto 3298** sobre la Política Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, la **Resolución 630** para garantizar la reserva de puestos de trabajo en las empresas a beneficiarios rehabilitados o a personas con discapacidad rehabilitadas.

En el Artículo 8 de la **Ley 13.146** se señala que “Es deber del Estado, de la sociedad y de las familias, garantizar a una persona con deficiencia y con prioridades, el ejercicio de los derechos referentes a la vida, la salud, la sexualidad, la paternidad y la maternidad, la alimentación, la vivienda, la educación, la profesionalización, al trabajo, a la seguridad social, la habilitación, la rehabilitación, al transporte, a la accesibilidad, a la cultura, al deporte, al turismo, al ocio, al información, la comunicación, a los avances tecnológicos, la dignidad, el respeto, la libertad, la convivencia familiar y comunitaria, entre otros derivados de la Constitución Federal, de la Convención sobre los Derechos de las personas con deficiencia y su Protocolo facultativo y de las leyes y otras normas que garantizan su bienestar personal, social y económico”, lo que permite identificar que se comparte la responsabilidad de los cuidados de las personas con discapacidad entre otros actores diferentes a las familias.

En lo correspondiente a las personas adultas mayores, las leyes son: **Ley 10741** Estatuto de la ancianidad, **Orden de Servicio 619** del Instituto Nacional de Seguridad Social cálculo de pensiones, y **Ley 8842** Derechos Sociales de los Ancianos. En términos generales, las legislaciones nacionales contribuyen al tratamiento de los temas de la agenda social y a tomar medidas como asuntos de derechos humanos. La promulgación de las leyes es imprescindible en el avance de las garantías y protección individuales y sociales. Para promover el enfoque de los derechos humanos

en los asuntos de las personas mayores, los Estados deben crear las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan su desarrollo íntegro.

La legislación en materia de prestaciones laborales y medidas de apoyo a las mujeres son: **Ley núm. 13109**, de 25 de marzo de 2015, que establece licencias por maternidad, paternidad y adopción en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la **Ley 10836** crea el Programa Bolsa de Familia y otras medidas. **Ley 7644** regula la actividad de la madre social y se dictan otras disposiciones, **Decreto 75207** por el que se reglamenta la ley que incluyó el Salario de Maternidad entre las prestaciones de la previsión social. **Ley 6136** que prevé los subsidios de maternidad. **Ley 12812** codifica las leyes de trabajo para disponer sobre la estabilidad provisoria de la embarazada. **Ley 10421** que extiende a la madre adoptiva el derecho a la licencia y salario por maternidad. Las licencias por maternidad son de 120 días y cinco días por paternidad. La licencia de paternidad consiste en la concesión de un período de tiempo al padre inmediatamente después del nacimiento, para participar en la atención de la o el recién nacido y la madre, se trata de un estímulo para la interacción de los padres con su familia. De acuerdo con datos que utiliza la OIT, esta medida tiene efectos positivos sobre la igualdad de género en el hogar y el trabajo, y por el vínculo que guarda la licencia del padre, la participación en las responsabilidades familiares, y el desarrollo infantil es pauta de cambios en la relación y percepción de los patrones de comportamiento predominantes (OIT, 2014).

¿Se observa en la legislación que refieren a los problemas/especificidades que se plantean desde una mirada interseccional?

Sí, en el Artículo 18 que hace referencia al Artículo 3 de la **Ley 8069** del 13 de julio de 1990 (Estatuto del Niño y del Adolescente) señala que: “a partir de ahora incluirá el siguiente párrafo único: Artículo 3 Párrafo único. Los derechos establecidos en la presente Ley se aplica a todos los niños y adolescentes, sin discriminación de nacimiento, estado civil, edad, género, raza, etnia o color, religión o convicciones, discapacidad, condición personal de desarrollo y aprendizaje, condición económica, social, región y lugar de residencia u otra condición que diferencia a las personas, familias o la comunidad en la que viven; es importante dada la diversidad de características que muestra la población de Brasil y que se aluden en esta adición al Artículo 18 de la **Ley de Primera Infancia**.

La participación de madres sociales, desde los años ochenta ha logrado disminuir la mortalidad infantil ya que facilitan el trabajo remunerado de las madres biológicas, su descanso y dedicación a sus hijas/os. Son medidas que descargan de trabajo de cuidados no remunerado a las

mujeres trabajadoras lo que hace posible su incorporación al mercado de trabajo con remuneraciones; sin embargo, no son medidas que modifiquen la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres el rol de cuidadoras sin pago alguno lo que reproduce sus condiciones de pobreza y el no acceso a otros derechos.

Este conjunto de normas relacionadas con los cuidados de la infancia, la adolescencia, las personas mayores y las que tienen alguna discapacidad responden a la necesidad de contar con servicios de cuidado de estos grupos de la población, cuentan con una visión de interseccionalidad ya que menciona la diversidad de personas que integran la población debido al color de piel, la edad, la etnicidad.

Coherencia de las acciones propuestas en la ley con los objetivos de reconocimiento de los cuidados de las personas como trabajo asignado a las mujeres que no les facilita el ejercicio de otros derechos, como el trabajo remunerado, por lo que es necesario la modificación de la división sexual del trabajo.

¿Qué solución ofrecen a los sesgos de género en la asignación de estos trabajos?

Las acciones para atender los cuidados de las personas están diseñadas para iniciar la eliminación de los sesgos de género, aunque lograrlo depende de que los hombres asuman las disposiciones establecidas en las normas de paternidad y de su participación en los cuidados. Las diferencias en los días de permiso laboral cuando nace una nueva persona y la alusión a su participación en las tareas de cuidado, sin especificar cuáles son esas tareas, puede ser un motivo de omisión. Las acciones incluidas en la **Ley 13.257** de primera infancia consideran en el Artículo 5: “Las áreas prioritarias de políticas públicas para la salud de la primera infancia, la alimentación y la nutrición, la educación de los niños, la familia y la vida en comunidad, la asistencia social a la familia del niño, la cultura, el juego y el esparcimiento, el espacio y el medio ambiente, así como la protección contra todas las formas de violencia y la presión consumista, la prevención de accidentes y la adopción de medidas para evitar la exposición temprana a la comunicación de marketing.

Artículo 4: Las políticas públicas dirigidas a los derechos del niño en la primera infancia serán desarrollados e implementados con el fin de:

I - servir a los mejores intereses de los niños y sus derechos en su condición de sujeto y de los ciudadanos;

Las acciones consideradas para atender a las personas con discapacidad contenidas en la Ley 13146 son las siguientes: Artículo 15. El proceso mencionado en el Artículo 14 de esta Ley se basa en la evaluación multidisciplinaria de las necesidades, habilidades y potencialidades de cada persona, observadas en las siguientes directrices: I.

Diagnóstico e intervención temprana; II. Adopción de medidas para compensar la pérdida o limitación funcional, buscando el desarrollo de las aptitudes; III. Atención permanente, integrada y articulada de las políticas públicas que posibiliten una plena participación social de las personas con deficiencia; IV. Oferta de redes de servicios articulados con actuación intersectorial en los diferentes niveles de complejidad, para atender las necesidades específicas de las personas con deficiencia; V. Prestación de servicios próximos al domicilio de la persona con deficiencia, inclusive en la zona rural, respetando la organización de las Redes de Atención a la Salud (RAS) en los territorios locales y las normas del Sistema Único de Salud (SUS)”

Las que están incluidas en la **Ley Nº 10741** de atención a las personas mayores son la “Creación de las unidades de referencia por regiones con equipos especializados para la atención de calidad a la persona mayor y con énfasis en la humanización de los servicios de salud. Estas unidades también deberán estar abiertas a los grupos de personas mayores para desarrollar además actividades culturales, sociales y otras.

“En relación con el ocio, la cultura y el deporte, en las grandes ciudades, en general, se respeta el derecho al acceso con descuento y ya hay un mercado de turismo, espectáculos y otras actividades dirigidas a las personas mayores. Pero hay que destacar que la mayoría de quienes viven con los escasos recursos de sus jubilaciones y pensiones, no tienen acceso a la mayor parte de esas actividades” (Ley 10741: 1-2).

¿Consideran la participación de los hombres en la realización de estos trabajos?

En la **Ley de la Primera Infancia** sí se considera la participación de los hombres en los cuidados de las niñas y los niños: “La madre y el padre, o responsables, tienen iguales deberes y responsabilidades compartidas en el cuidado y la educación de los derechos del niño y deben salvaguardarse el derecho de transmisión de sus creencias y culturas familia [sic], garantizar los derechos de los niños establecidos en este la ley” (Artículo 26). No obstante, en los cuidados de las personas mayores, con alguna enfermedad o discapacidad no se menciona la necesaria participación de los hombres.

¿Consideran la participación de las empresas y de la comunidad?

Sí, la **Ley 11.770** que crea el Programa Empresa Ciudadana, en donde se establecen las condiciones para extender el permiso de maternidad mediante la concesión de incentivos fiscales y la Ley 7644 acerca de las madres sociales.

¿Cuál es la forma de participación del Estado?



La participación del Estado se encuentra en la elaboración de las leyes, reglamentos y el otorgamiento de servicios de cuidado de la niñez, las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, la atención a las y los trabajadores que solicitan una licencia de maternidad y paternidad.

¿Quién elaboró las normas y es(son) responsable(s) del problema?

Respecto de las instituciones involucradas en la reglamentación y el otorgamiento de los cuidados, para la infancia, una de las instituciones oficiales es el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (CONADA). Las instituciones oficiales responsables son el Consejo Nacional de los Derechos de las Personas Portadoras de Discapacidad (CONADE), órgano superior de deliberación colegiada dependiente de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, y la Coordinadora Nacional para la Integración de las Personas Portadoras de Discapacidad (CORDE), órgano de asesoría dependiente de la Secretaría Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. La organización social que representa sus intereses es la Federacao Nacional das Avapes (Asociación para la Valorización y Promoción de Personas con Discapacidad, FENAVAPE), y la Red de Organizaciones Federadas. Por último, la organización social encargada de los cuidados de las personas mayores es la Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, asociación civil que congrega médicos y otros profesionales de nivel superior interesados en la geriatría y la gerontología. Es importante destacar la importancia que las leyes dan a la participación de las y los beneficiarios de las leyes en su diseño, en el caso de la Ley de la Primera Infancia señala en su Artículo 4 que esta ley “incluye la participación del niño en la definición de acciones que les afecten, en función de su edad y características de desarrollo” (Inciso II).

¿Quién tiene voz en la definición del problema y de la solución?

Además de las dependencias gubernamentales y la ciudadanía, organismos internacionales como la OIT y la OEA, sí existe adhesión a sus propuestas. La legislación brasileña muestra que la concepción de los cuidados es más amplia, como en las leyes sobre la primera infancia que tienen como punto de atención: Las áreas prioritarias de políticas públicas para la salud de la primera infancia, la alimentación y la nutrición, la educación de los niños, la familia y la vida en comunidad, la asistencia social a la familia del niño, la cultura, el juego y el esparcimiento, el espacio y el medio ambiente, así como la protección contra todas las formas de violencia y la presión consumista, la prevención de accidentes y la adopción de

medidas para evitar la exposición temprana a la comunicación de marketing (Ley de Primera Infancia, Artículo 5) .

Asimismo, regula el trabajo de quien denominan madre social quien es la persona que hace trabajos de cuidados para niñas/os en situación de abandono. Su desafío se encuentra en el reconocimiento de la asignación de género del trabajo de cuidados para modificarla y considerar medidas para garantizar la ruptura de la división sexual del trabajo.

Por las medidas adoptadas en Brasil con la finalidad de responder a los cuidados desde la responsabilidad del Estado y las familias, se puede decir que cuentan con políticas tipo b, según la clasificación de Batthyány: Políticas sistémicas e integrales, orientadas a la distribución y a promover un papel activo del Estado. Son políticas que se vinculan con los sectores de educación y trabajo. Una muestra de la debilidad de la implementación de estas políticas es que no necesariamente implican un proceso de reconocimiento del trabajo no remunerado, ya que no es explícitamente tratado en las leyes revisadas.



COSTA RICA

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Ley 9207 de reforma de la Ley núm. 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. 2014-02-25	Reforma la definición de discapacidad contenida en el artículo 2 y los artículos 62 (multa) y 67 (sanción por desacato de las normas de accesibilidad) de la citada Ley. Asimismo, adiciona la definición de accesibilidad al artículo 2 y agrega el Artículo 45 bis.	Personas con discapacidad	Familias
Ley 8.854/2008 Abolición del Castigo Físico	Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante.	Personas cNiños y adolescenteson discapacidad	
Ley 7735 J/1997 Ley General de Protección a la Madre Adolescente -(Modificada a partir de la Ley nº 8312/2002)	Regulará todas las políticas, las acciones y los programas preventivos y de apoyo, que ejecuten las instituciones gubernamentales, dirigidas a madres adolescentes.	Madres adolescentes y sus hijos	Mujeres, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales e indígenas
Ley 8312 por la que se modifica la Ley General de Protección a la madre adolescente, núm. 7735, de 19 de diciembre de 1997. 2002-09-30	Las modificaciones se refieren al concepto de “madre adolescente”, los fines y la integración del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente y a la cooperación institucional.	Mujeres, adolescentes y niñas	
Ley 8122/2001 Aprobación del Convenio Internacional 182 Sobre “La Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil”	Apruébase el Convenio Internacional Nº 182 sobre “La prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación”, adoptado en la Octogésima Séptima Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en 1999.	Personas menores de (18) años.	Mujeres y personas en situación de pobreza
Ley 181/2000 Código de Educación	La formación de ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana.	Menores de edad	Personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM. Ley 7935 Integral para la Persona Adulta Mayor 19 de octubre de 1999	Los objetivos de la presente ley serán: a) Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos. b) Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y aplicación de las políticas que las afecten. c) Promover la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario. d) Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población. e) Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a esta población. f) Garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores.	Personas Adultas Mayores	Familias
Ley 7.739/1998 Código de Niñez y Adolescencia (Modificaciones Ley 9001/11)	Definir el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad.	Menores de edad y madres	Mujeres, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales, indígenas y afro-descendientes
Ley de Paternidad Responsable	Los derechos de las madres e hijas/os extramatrimoniales y de las y los menores cambian su filiación mediante un procedimiento administrativo que lleva el Registro Civil.	Menores de edad y madres	Familias
Decreto 27558-MTSS, por el que se establece el Reglamento a la ley de desarrollo social y asignaciones familiares. 1998-12-10	Establece la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, determina su naturaleza, objetivos y funciones, así como su estructura orgánica. Aborda la administración del Fondo de Desarrollo Social y asignaciones Familiares (FONDESAF).	Mujeres	Familias
Ley 7600/1998 Ley Igualdad de Oportunidades Para Las Personas Con Discapacidad	Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social, así equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad	Personas con discapacidad	Familias

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Decreto 23670-MTSS por el cual se dicta el Reglamento a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 1994-09-23	Regula el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Se destinará a financiar programas y servicios para las familias cuyo ingreso per capita se sitúe por debajo del nivel de pobreza.	Mujeres	Familias
Decreto 16092-P-TSS por el que se reforma el capítulo XIII del reglamento de la ley de desarrollo social y asignaciones familiares, decreto ejecutivo núm. 13172-TSS, de 30 de noviembre de 1981. 1985-03-12	Crea el Consejo Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	Familia	
Decreto 8787-TSS: reglamento de la ley núm. 5662 de 1974 de desarrollo social y asignaciones familiares.1978-07-05	Trabajadores con responsabilidades familiares	Familia	
Ley 5.395/1973 Ley General de Salud	Velar por la salud de la población. Corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley.	Niños, madres gestantes y familias	Mujeres y personas con capacidades diferentes
Ley 5.476/1973 Código de Familia	Proteger a la familia.	Menores de edad, madres y familias	Mujeres y personas con capacidades diferentes
Decreto 35434/2009 Implementación del Teletrabajo en Mujeres Que Se Encuentren en Estado de Embarazo que Presten Servicios en Instituciones Públicas y Empresas Públicas del Estado y Todas las Empresas del Sector Privado	La mujer que preste servicios en instituciones públicas y empresas públicas del Estado y en cualquier empresa del sector privado, que se encuentre en estado de embarazo, podrá prestar sus servicios desde su domicilio, o lugar habilitado para esos efectos, sujeto a la naturaleza de sus funciones, de forma tal que el trabajo que desarrolla pueda realizarse en los términos del Decreto Ejecutivo 34704-MP-MTSS del 31 de julio del 2008.	Mujeres embarazadas	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
Ley 7491 por la cual se reforma el artículo 95 del Código de Trabajo.	La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior a los tres meses posteriores al parto. El sistema de remuneración se regirá según lo dispuesto para el "riesgo por maternidad" y se computará a todos los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo. Se otorgan los mismos beneficios en caso de adopción.	Mujeres trabajadoras	Familias
Ley 7621 por la cual se reforma el artículo 95 del Código de Trabajo.1996-09-05	La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él. Se regula el sistema de remuneración y las contribuciones sociales durante la licencia. La trabajadora que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos y de una licencia de tres meses.	Mujeres trabajadoras	Familias

Pertinencia de la legislación costarricense frente al problema de la asignación del trabajo de cuidados no remunerado a las mujeres, lo que conduce a las mujeres a no ejercer sus derechos y a las familias a permanecer en condiciones de pobreza y sin cambio en la división sexual del trabajo.

¿Las leyes consideran el trabajo de cuidados no remunerado como un problema de desigualdad de género que coloca en una desventaja aún mayor a las mujeres, ya que al ser casi exclusivas responsables de este trabajo las excluye de otros derechos?

No se hace mención del problema de desigualdad de género y de derechos humanos que implica la asignación del trabajo de cuidados a las mujeres; sin embargo, se incluye a los hombres como responsables de estos cuidados lo que facilita el inicio de la modificación de la división sexual del trabajo.

¿Lo representan solo como un problema que afecta a los sectores de menores ingresos y, por lo tanto, el Estado debe intervenir?

No. Las disposiciones legales sobre el cuidado de la niñez y las personas mayores, así como las que tienen alguna discapacidad son de cobertura universal.

Sobre los cuidados a la infancia y adolescencia, el Artículo 1 del **Código de Niñez y Adolescencia Ley 7739**, señala que: “Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta población. Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de este Código”. Por otra parte, el Artículo 4 sobre políticas estatales dice que “será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. En la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación se mantendrán siempre presentes bajo el interés superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población.

“De conformidad con el régimen de protección especial que la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, este Código y leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí establecidas”.

En el Artículo 30 se encuentra su derecho a ser cuidada/o: “Las personas menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y madre; asimismo, a crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas por ellos”. Y en el 31 se establece el derecho a la educación en el hogar: “Las personas menores de edad tendrán derechos a crecer y ser educadas en el seno de una familia; siempre se les asegurarán la convivencia familiar y comunitaria. Cuando el cumplimiento de este derecho peligre por razones socioeconómicas, educativas y ambientales, las instituciones públicas competentes brindarán las oportunidades que se requieran para superar la problemática familiar, así como la capacitación y orientación laboral a los padres y madres [...]”. En el Capítulo V de este Código se establece el Derecho a la Educación que el Estado debe garantizar a través de las políticas educativas. Por último, en el Capítulo IV Derecho a la Salud, se encuentran las disposiciones que sostienen el derecho de las personas menores de edad a la atención médica directa y gratuita por parte del Estado sin discriminación de raza, género, condición social y nacionalidad.

Respecto a la paternidad, la **Ley de Paternidad Responsable** señala que “en la inscripción de nacimientos de hijos e hijas

habidos fuera del matrimonio, se consignarán la paternidad y la maternidad [...]”. Esta disposición pretende que el padre biológico asuma la responsabilidad de la atención de la hija/o, para lo cual, si hubiere negativa del padre respecto de la paternidad de la o el menor, se realizan pruebas comparativas de marcadores genéticos regulados por el Estado.

En relación con las personas mayores, la Ley 7935 Integral para la persona Adulta Mayor menciona que los objetivos serán:

- a) Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos.
- b) Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y aplicación de las políticas que las afecten.
- c) Promover la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario.
- d) Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población.
- e) Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a esta población.
- f) Garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores.

Esta misma ley, en el Artículo 12 menciona que “El Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para la jubilación”.

Respecto de las personas con discapacidad, la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad señala en el Artículo 3 que los objetivos son:

- a) Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico.
- b) Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos.
- c) Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.
- d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas



necesarias para la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.

Además, el Artículo 4 menciona las obligaciones del Estado para cumplir con la Ley:

- a) Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus instituciones, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios que, con base en esta ley, se presten; así como desarrollar proyectos y acciones diferenciados que tomen en consideración el menor desarrollo relativo de las regiones y comunidades del país.
- b) Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público sean accesibles para que las personas los usen y disfruten.
- c) Eliminar las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, promueven la discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los programas y servicios.
- d) Apoyar a los sectores de la sociedad y a las organizaciones de personas con discapacidad, con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.
- e) Garantizar el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad de participar en las acciones relacionadas con la elaboración de planes, políticas, programas y servicios en los que estén involucradas.
- f) Divulgar esta ley para promover su cumplimiento.
- g) Garantizar, por medio de las instituciones correspondientes, los servicios de apoyo requeridos por las personas con discapacidad para facilitarles su permanencia en la familia.
- h) Garantizar que las personas con discapacidad agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono, tengan acceso a los medios que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna.

En las políticas de atención a las personas con discapacidad se señalan penas a las personas que discriminen y a las que no asuman las disposiciones legales, además incluyen otras para fortalecer su participación en el trabajo remunerado, como las que facilitan su atención a la condición de maternidad. Las trabajadoras tienen derecho a licencia por maternidad remunerada en caso de parto. Las mujeres embarazadas tienen derecho a un período obligatorio de licencia remunerada de cuatro meses (120 días), incluyendo un mes antes del parto y tres meses posteriores al parto. La licencia de maternidad se puede extender por tres meses por razones médicas. Para beneficiarse de la licencia por maternidad

remunerada, las trabajadoras deben presentar al empleador un certificado médico que indique la fecha aproximada del parto que ocurra, probablemente, en un plazo de cinco semanas. Se otorgan los mismos derechos a la trabajadora en caso de adopción, es decir, tres meses de licencia inmediatamente después de la adopción. Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a 45 días de licencia por maternidad remunerada en caso de aborto espontáneo. La licencia de maternidad se otorga con sueldo completo. El empleador paga la mitad del salario de la trabajadora y el gobierno, a través de la Caja Costarricense de Seguro Social, paga la otra mitad. En caso de aborto espontáneo o parto prematuro no viable, el monto del beneficio se reduce a la mitad. Las clínicas con cobertura de la Caja de Seguro Social y los Centros de Cuidado de Salud proporcionan atención gratuita antes y después del parto para las madres adolescentes. Hasta el año 2014 no hay ninguna disposición en la ley sobre la licencia de paternidad remunerada o no, sobre el permiso parental remunerado o no, ni disposiciones que apoyen la conciliación para el equilibrio entre la vida y el trabajo de los padres trabajadores con responsabilidades familiares, tampoco ha referencia al convenio de la OIT ratificado por la Asamblea Legislativa que disponga el derecho de los trabajadores a licencias por paternidad. Respecto de la **Ley 5662 de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares** y su **Reglamento** se observa lo siguiente:

Artículo 2. Son beneficiarios del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares los costarricenses y extranjeros residentes legales del país, así como las personas menores de edad, quienes a pesar de carecer de una condición migratoria regular en el territorio nacional, se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con los requisitos que se establezcan en esta y las demás leyes vigentes y sus reglamentos.

Artículo 3. Con recursos del FODESAF se pagarán, de la siguiente manera, programas y servicios a las instituciones del Estado y a otras expresamente autorizadas en esta ley, que tienen a su cargo aportes complementarios al ingreso de las familias y la ejecución de programas de desarrollo social

¿Se observa en la legislación que refieren a los problemas/especificidades que se plantean desde una mirada interseccional?

En el caso de la niñez y la adolescencia, el Artículo 6 del Código de niñez y adolescencia Ley 7639, establece que quien tome decisiones sobre las personas en la niñez o la adolescencia deberá tomar en cuenta los usos y las costumbres propios del medio sociocultural en que se desenvuelve siempre y cuando no contraríen sus derechos. Para los demás grupos

sociales que se analizan en este estudio se hace mención de su totalidad, sin especificar los rasgos que pueden diferenciarlos, por lo que se hace necesaria una mención explícita de la diversidad que se pudiera identificar en ellos.

¿Consideran al trabajo de cuidados no remunerado como un obstáculo para la participación de las mujeres en el trabajo remunerado?

No se hace alusión al tema de los trabajos de cuidado no remunerados como una limitación para que las mujeres participen en el remunerado; sin embargo, la participación de los hombres en los cuidados podría ser un mecanismo facilitador de tal participación. Las leyes anotadas aquí cumplen con una función protectora, desarrollan programas de atención personalizada a población en condiciones de pobreza, responden a un gran abanico de demandas ciudadanas, cuentan con el compromiso coordinado de los Ministerios de ejecución de política social; sin embargo, aunque descargan de trabajo de cuidados a las mujeres no existe una línea integradora que oriente el curso de sus acciones para modificar la división sexual del trabajo. Es necesario definir la política social como no asistencialista, incluir a la población beneficiaria en la definición de la política pública y actualizar los modelos y programas de atención de acuerdo con las nuevas necesidades de la población, como es la igualdad de género, reconocido como un principio que debe regir las políticas en los últimos tiempos. La población no es estática, es dinámica; el origen y condiciones de las demandas de atención cambian con las nuevas generaciones, características que el Estado, el sector privado y las organizaciones deben considerar para cumplir con las tareas que les corresponden.

Coherencia de las acciones propuestas en la Ley con los objetivos de reconocimiento de los cuidados de las personas como trabajo asignado a las mujeres que no les facilita el ejercicio de otros derechos como el trabajo remunerado por lo que es necesario la modificación de la división sexual del trabajo.

¿Qué solución ofrecen a los sesgos de género en la asignación de estos trabajos?

Las medidas que se toman para resolver el problema sesgado por género (asignación de trabajos casi de manera exclusiva a las mujeres) son: Centros de Atención Integral que brindan servicio a personas hasta de 12 años, en diferentes jornadas, donde se les garantiza la satisfacción de sus necesidades básicas y se promueve su desarrollo integral. Estos centros podrán ser públicos, privados o mixtos. Esto es, en Costa Rica sí se consideran acciones que involucren diferentes actores y una edad de atención a los cuidados que abarca

mayor número de años de las y los niños, lo que facilita la participación laboral de su mamá y su papá. Sin embargo, es necesario reconocer que hace falta considerar los grupos de mujeres que cuidan a personas mayores y con alguna discapacidad.

¿Consideran la participación de los hombres en la realización de estos trabajos?

Sí, como se ha estado comentando, en Costa Rica existen diversas disposiciones legales que hacen mención de la obligación de los padres de participar en los cuidados de las personas en la edad infantil y adolescencia. Sin embargo, no son considerados para los cuidados de las personas con alguna discapacidad y mayores.

¿Consideran la participación de las empresas y de la comunidad?

Sí se menciona, específicamente, la participación de empresas y comunidad en facilitar los cuidados; no obstante, sería necesaria una mayor participación de las empresas en el otorgamiento de servicios de cuidado accesibles a la población.

¿Cuál es la forma de participación del Estado?

A través de la formulación de leyes, el otorgamiento de servicios de cuidado y la inclusión clara de los hombres en las responsabilidades de cuidado de las y los menores.

¿Quién elaboró las normas y es(son) responsable(s) del problema?

Los principales actores que participan en este apartado son los Ministerios de Salud, Trabajo, la Asamblea Legislativa y los empleadores (del ámbito público y privado). Las acciones concretas que se realizan son licencias por maternidad, servicios educativos, atención médica gratuita y pago de salarios.

¿Quién tiene voz en la definición del problema y de la solución?

Fundamentalmente el Estado y las familias; sin embargo, se espera que asuman los compromisos que se contraen con la OIT y se observen las sugerencias de la OEA respecto de las políticas de conciliación que faciliten la modificación de la división sexual del trabajo.



De acuerdo con esta información, las leyes que atienden los cuidados en Costa Rica muestran por una parte, disposición por incluir al Estado, al sector privado y a las organizaciones sociales en la discusión, normatividad y operación de las medidas que se aplican en beneficio de la sociedad costarricense. Son políticas orientadas también a dar apoyo a mujeres en situación de pobreza y que no equilibran la responsabilidad de labores de cuidado de las personas mayores y con alguna discapacidad entre mujeres y hombres.

URUGUAY

No se observan alusiones específicas a la diversidad poblacional, lo que puede excluir a grupos de la población que forman minorías. Se puede decir que cuentan con políticas tipo b, según la clasificación de Batthyány: Políticas sistémicas e integrales y orientadas a la distribución y a promover un papel activo del Estado; involucran un proceso de reconocimiento del trabajo no remunerado sin cuestionar la asignación a las mujeres. Son políticas que se vinculan con los sectores de educación y trabajo.

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>Ley 19353/2015 Creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC)</b>	La presente ley tiene por objeto la promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia, su atención y asistencia, mediante la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), como conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado.	Personas en situación de dependencia: Niños, y niñas hasta 12 años; Personas con Discapacidad; Personas mayores de 65 años.	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
<b>Decreto 117/016, de 25 de abril, que crea y regula el Servicio de Asistentes Personales para cuidados de larga duración para personas en situación de dependencia severa 2016-04-25</b>	Crea y regula el Servicio de Asistentes Personales para Cuidados de Larga Duración para Personas en Situación de Dependencia Severa.	Personas con discapacidad	Familias
<b>Decreto 214/014, de 28 de julio, que crea y regula el Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidades Severas 2014-07-28</b>	El decreto crea y regula el Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidades Severas en situación de dependencia que sean beneficiarios de una pensión por invalidez.	Personas con discapacidad	Familias
<b>Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Adulto Mayor marzo de 2012. Instituto Nacional del Adulto Mayor INMAYORES enero 2012. Ley 18617 de octubre de 2009 para el Adulto Mayor.</b>	Crea, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM), que será presidido por un Director designado por el Presidente de la República entre profesionales, técnicos o personalidades reconocidamente expertas en el tema..	Adultos mayores	Familias
<b>Ley 18651/2010 Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad</b>	"Establecer un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas"	Personas con discapacidad	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
<b>Decreto 274/010/2010 Reglamentación de la Ley 18335, sobre derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud</b>	Todo niño, niña o adolescente tiene derecho al acceso a los servicios de salud, incluyendo los referidos a la salud sexual y reproductiva. Los profesionales de la salud actuantes deberán respetar la confidencialidad de la consulta y ofrecerles las mejores formas de atención y tratamiento cuando corresponda. Los adolescentes a quienes, de acuerdo al principio de autonomía progresiva, los profesionales de la salud consideren suficientemente maduros para recibir atención fuera de la presencia de los padres, tutores u otros responsables, tienen derecho a la intimidad y pueden solicitar servicios confidenciales e incluso tratamiento confidencial. En ningún caso los servicios de salud podrán negar la inmediata atención a los niños, niñas o adolescentes que la soliciten alegando la ausencia de los padres, tutores u otros responsables, a los que se procurará contactar a los efectos de poner la situación en su conocimiento, a menos que se trate de casos en que la consulta del adolescente sea confidencial. (Art.11)	Todos los habitantes usuarios o pacientes residentes en el país y no residentes que adquieran ese derecho. (Niños, niñas y adolescentes)	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>Ley 18.590/2009 Modifica Disposiciones relativas a la Adopción del Código de la Niñez y Adolescencia</b>	Modificar disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia relativas a adopción.	Niños, adolescentes y familias	
<b>Ley 18.640/2009 Promoción de la Salud y la Educación en la Niñez y la Adolescencia en el Ámbito de la Educación Pública</b>	"Declárense de interés nacional los programas de carácter general que tengan como objeto actividades de apoyo a la promoción de la salud y la educación en la niñez y la adolescencia en el ámbito de la educación pública".	Niños y adolescentes	Personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
<b>Ley 18211/2007 Sistema Nacional Integrado de Salud</b>	La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes en el país y establece las modalidades para su acceso a servicios integrales de salud. Sus disposiciones son de orden público e interés social.	Todos los habitantes residentes en el País	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
<b>Ley 18214 (Incorpora y modifica disposiciones al Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil)/2007 Integridad Personal Niños, Niñas y Adolescentes</b>	Prohibición del castigo físico a padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes (Artículo 1, incorpora el artículo 12 bis al código de la niñez y adolescencia).	Niños, niñas y adolescentes	Mujeres
<b>Ley 17.823/2004 Código de la Niñez y Adolescencia</b>	Dar efectiva protección a los derechos de los niños y adolescentes y fijar políticas aplicables a las distintas áreas vinculadas con la niñez, la adolescencia y la familia.	Niños y adolescentes	Personas en situación de pobreza, indígenas, afro-descendientes y personas con capacidades diferentes
<b>Ley 17.386/2001 Ley de acompañamiento de persona de su confianza durante el parto</b>	Disponer que toda mujer tendrá derecho a estar acompañada de una persona de su confianza o en su defecto, a su libre elección, de una especialmente entrenada para darle apoyo emocional, durante el tiempo que dura el trabajo de parto, incluyendo el momento del nacimiento.	Mujeres embarazadas y recién nacidos	Mujeres y personas en situación de pobreza
<b>Ley 17015/1998 Normas referentes a la educación inicial que se dispensa a niños menores de seis años</b>	Diversas disposiciones sobre la educación en la infancia	Niños/as menores de seis años.	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
<b>Ley 15.084/1980 Dirección de las Asignaciones Familiares</b>	Asignar una prestación en dinero que se servirá a todo empleado de la actividad privada que preste servicios remunerados a terceros y que tenga hijos o menores a su cargo.	Empleados en situación de desocupación forzosa, mujeres embarazadas, vendedores de diarios, empleadas del servicio doméstico, pequeños productores rurales y niños menores de 14 años	Mujeres, personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
<b>Ley 19313, de 13 de febrero de 2015, que regula el trabajo nocturno. 2015-02-13</b>	Regula el trabajo nocturno, disponiendo que a la mujer embarazada o que ha dado a luz, hasta un año posterior a su alumbramiento, se le asignará horario de trabajo diurno por parte del empleador, por la sola voluntad de la trabajadora, y estableciendo una sobretasa mínima del 20% (veinte por ciento) para las distintas áreas de actividad o equivalente en reducción horaria toda vez que el trabajador desarrolle efectivamente las tareas en horario nocturno por más de cinco horas consecutivas por jornada de labor. A estos efectos se establece como trabajo nocturno todo aquel que se desempeñe entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente	Mujer	Familia
<b>Ley 19161 de subsidio por maternidad. 2013-11-01</b>	Dispone que tienen derecho al subsidio por maternidad las trabajadoras dependientes de la actividad privada, las trabajadoras no dependientes que desarrollaren actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, siempre que no tuvieran más de un trabajador subordinado, los titulares de empresas monotributistas y las trabajadoras que, habiendo sido despedidas, quedaren grávidas durante el periodo de amparo al subsidio por desempleo previsto en el Decreto-Ley núm. 15180, de 20 de agosto de 1981 y modificativas.	Mujer	Familia
<b>Ley 19.161/2013 Licencia Especial Por Maternidad</b>	Tienen derecho al subsidio por maternidad. a) las trabajadoras dependientes de la actividad privada.- b) Las trabajadoras no dependientes que desarrollen actividades amparadas por el Banco de Previsión Social -c) Titulares de empresas monotribustistas y trabajadoras que habiendo sido despedidas, quedaren grávidas durante el periodo de amparo al subsidio por desempleo	Mujeres embarazadas, niños menores (recién nacidos)	Mujeres

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA			
LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Ley 17215 por la que se dictan normas que comprenden a toda trabajadora pública o privada que se encontrare en estado de gravidez o en período de lactancia. 1999-09-24	Establece que toda trabajadora pública o privada que se encontrare en estado de gravidez o en período de lactancia tendrá derecho a obtener un cambio temporario de las actividades que desempeña, si las mismas, por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, pudieren afectar la salud de la progenitora o del hijo. Las trabajadoras que se hubieren amparado en el derecho al traslado de funciones no podrán, por esa sola causa, ser suspendidas, despedidas, perjudicadas en sus derechos laborales ni postergadas en su carrera funcional.	Mujeres embarazadas y recién nacidos	Familia
Decreto 162/993 por el que se establece que tendrán derecho al cobro de asignación familiar y subsidio por maternidad las personas que en cualquier área territorial realicen tareas domésticas	Establece que tendrán derecho al cobro de asignación familiar y subsidio por maternidad las personas que en cualquier área territorial realicen tareas domésticas	Mujeres	Mujeres y personas en situación de pobreza
Ley 16.104/1990 Normas reglamentarias que regulan las licencias laborales para empleados públicos	Regular las licencias otorgadas a empleados públicos: ordinaria, por enfermedad, por maternidad y paternidad, por duelo, por matrimonio, por donación de sangre u órganos y las licencias especiales)	Embarazadas empleadas en el sector público	Mujeres
Decreto 227 por el que se establecen las prestaciones que servirá la dirección de las asignaciones familiares.1981-06-11	Asignación familiar, subsidio por maternidad, salario familiar.	Mujeres	Mujeres y personas en situación de pobreza
Ley núm. 15084 sobre Asignaciones Familiares. 1980-11-18	Dispone que la asignación familiar es una prestación en dinero que se servirá a todo empleado de la actividad privada que prestare servicios remunerados a terceros y que tenga hijos o menores a su cargo. Regula las condiciones de la asignación familiar en general así como el subsidio por maternidad.	Mujeres	Mujeres y personas en situación de pobreza
Ley 13559, por la que se extiende a los trabajadores rurales los beneficios de la ley 12572 (salario de maternidad).1966-10-26	Agricultores; Protección de la maternidad	Mujeres	Mujeres y personas en situación de pobreza
Ley 12572, por la que se creen los salarios de maternidad.1958-10-23	Tienen derecho a la prestación las mujeres asalariadas embarazadas, quienes deberán cesar el trabajo seis semanas antes del parto y reanudarlo seis semanas después.	Mujeres	Familia
Decreto de 1 de junio de 1954, en el que se dan normas para la protección de la maternidad. 1954-06-01	Se dan normas para la protección de la maternidad, determinándose los descansos y beneficios que deben otorgarse a las empleadas y obreras durante los períodos de gravidez y posterior al parto, y las sanciones a aplicarse a los infractores	Mujeres trabajadoras	Familia
Decreto 224/007 de 25 de junio de 2007 por el que se dicta el Reglamento de la Ley núm. 18065 de 2006 sobre normas para la regulación del trabajo doméstico. 2007-06-25	Reglamenta en detalle las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores domésticos, tales como jornada de trabajo, horas extra, vacaciones y descanso semanal, salarios, edad mínima y modalidades de contratación.	Mujeres trabajadoras del hogar remuneradas	Familias de las mujeres trabajadoras en los hogares
Ley 18065 sobre normas para la regulación del trabajo doméstico. 2006-11-15	Normas para la regulación del trabajo doméstico remunerado.	Mujeres trabajadoras del hogar remuneradas	Familias de las mujeres trabajadoras en los hogares
Decreto 431/999, por el que se dispone el efectivo cumplimiento del sistema de protección integral de las personas discapacitadas, oportunamente establecido en la Ley núm. 18095. 1999-12-22	Dispone que los organismos del Estado, así como las personas de derecho público no estatales, a efectos de proceder a la provisión de vacantes, deberán realizar un llamado a aspirantes, en el que solo podrán participar aquellas personas que acrediten estar inscriptas en el Registro de Discapacitados.	Personas con discapacidad	Familias
Ley 18436 de Trabajadores públicos o privados que adoptan niños. 2008-12-02	Agrega un inciso al artículo 33 y modifica el artículo 36 de la Ley núm. 17292 de 25 de enero de 2001 en lo concerniente a la licencia y a la reducción del horario de trabajo en caso de adopción.	Mujeres	Familias

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Decreto 316/999 por el que se dictan normas relativas a las prestaciones de asignaciones familiares, previstas en el artículo 2° de la Ley núm. 15084.1999-10-06	Extiende la prestación familiar referida a todos los hogares de menores recursos. Define el concepto de 'hogares de menores recursos' y determina los atributarios: mujeres que constituyan el único sustento de hogares monoparentales, trabajadores amparados al seguro de desempleo y una vez agotada dicha cobertura y mujeres embarazadas. También aborda, entre otras cuestiones, el monto, los beneficiarios y la terminación de la prestación.	Mujeres	Familias
Ley 17139 por la que se extiende la prestación prevista en el artículo 2° de la Ley núm. 15084, a todos los hogares de menores recursos.1999-07-16	Se extiende la prestación asignaciones familiares en el artículo 2° de la Ley núm. 15084, a todos los hogares de menores recursos.	Mujeres	Familias
Decreto 227 por el que se establecen las prestaciones que servirá la dirección de las asignaciones familiares.1981-06-11	Asignación familiar, subsidio por maternidad, salario familiar.	Mujeres	Familias

Pertinencia de la legislación uruguaya frente al problema de la asignación del trabajo de cuidados no remunerado a las mujeres, lo que conduce a las mujeres a no ejercer sus derechos y a las familias a permanecer en condiciones de pobreza y sin cambio en la división sexual del trabajo.

¿Las leyes consideran el trabajo de cuidados no remunerado como un problema de desigualdad de género que coloca en una desventaja aún mayor a las mujeres ya que al ser casi exclusivas responsables de este trabajo las excluye de otros derechos?

En el Sistema Nacional Integrado de Cuidados se hace alusión a la desigualdad de género que está presente en la distribución de los trabajos de atención a los cuidados, por lo que también se menciona en sus principios (Artículo 4): “La inclusión de las perspectivas de género y generacional, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres, hombres y grupos etarios, promoviendo la superación cultural de la división sexual del trabajo y la distribución de las tareas de cuidados entre todos los actores de la sociedad”. La mención de la “superación cultural de la división sexual del trabajo” representa una aportación fundamental ya que es el obstáculo principal para alcanzar objetivos de igualdad de género en el ejercicio de todos los derechos. La realización de las labores de cuidado considerada como responsabilidad casi exclusiva de las mujeres y que implica largas jornadas.

¿Lo representan solo como un problema que afecta a los sectores de menores ingresos y, por lo tanto, el Estado debe intervenir?

10 Se consideran personas en situación de dependencia: 1) Niñas y niños de hasta doce años. 2) Personas con discapacidad que carecen de autonomía para desarrollar actividades y atender por si mismas sus necesidades básicas de la vida diaria. 3) Personas mayores de sesenta y cinco años que carecen de autonomía para desarrollar las actividades y atender por si mismas sus necesidades básicas de la vida diaria [Artículo 8].

En la **Ley 18.651** sobre la Protección Integral de Personas con Discapacidad, se encuentra el compromiso que tiene el Estado para atender a las personas con discapacidad: “Artículo 1. Establécese un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas”. En el Subsidio por maternidad y por paternidad para trabajadores de la actividad privada (**Ley 19.161**), se encuentra que “Las beneficiarias deberán cesar todo trabajo seis semanas antes de la fecha presunta del parto y no podrán reiniciarlo sino hasta ocho semanas después del mismo”. Y los hombres tendrán un descanso de “Un máximo de diez días continuos, a partir del 1 de enero de 2016 que [...] se iniciará el día del parto”; adicionalmente, las y los trabajadores serán beneficiarias/os del subsidio para cuidados que “tendrá un plazo máximo de goce del subsidio [...] a partir de 1 de enero de 2016, hasta sus seis meses de edad” (Artículos 2, 8 y 12).

■ **¿Se observa en la legislación que refieren a los problemas/especificidades que se plantean desde una mirada interseccional?**

La **Ley 19.353**, al considerar la universalidad de sus acciones, incluye a todos los sectores sociales y no solo a los grupos que viven en condiciones de pobreza como en otros países de América Latina, lo cual es una conceptualización de los cuidados como un derecho social y no como un problema que presenta una parte de la población debido a sus bajos ingresos. Esta inclusión podría generalizarse a los diversos grupos de la sociedad como pueblos indígenas, personas con diferentes preferencias sexuales o que posean diferente color de piel, ya que entre los principios (Artículo 4) se encuentra “La equidad, continuidad, oportunidad, calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios y las prestaciones de cuidados a las personas en situación de dependencia, así como la consideración de sus preferencias sobre el tipo de cuidado a recibir”. El Código de la Niñez y la Adolescencia (**Ley 17.823**) hace referencias a las diversas características que tiene la población y que es necesario reconocer para su atención incluyente: “Artículo 14. (Principio general). El Estado protegerá los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición económica, los impedimentos psíquicos o físicos, el nacimiento o cualquier

otra condición del niño o de sus representantes legales”.

■ **¿Consideran al trabajo de cuidados no remunerado como un obstáculo para la participación de las mujeres en el trabajo remunerado?**

Sí, las leyes señaladas fungieron como antecedentes del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, después de reconocer la necesidad de modificar profundamente la organización de la sociedad con fines de garantizar los derechos de las mujeres. Este sistema responde claramente al problema de asignación de los trabajos de cuidado a las mujeres, lo que significa la dificultad para ejercer los derechos al trabajo, a una remuneración; la política es pertinente en relación al problema.

■ **Coherencia de las acciones propuestas en la Ley con los objetivos de reconocimiento de los cuidados de las personas como trabajo asignado a las mujeres que no les facilita el ejercicio de otros derechos como el trabajo remunerado por lo que es necesario la modificación de la división sexual del trabajo.**

■ **¿Qué solución ofrecen a los sesgos de género en la asignación de estos trabajos?**

En el Código de la Niñez y la Adolescencia se mencionan las medidas que se tomarán para garantizar sus derechos; dice el Artículo 22: (Líneas de acción). “La atención hacia la niñez y la adolescencia se orientará primordialmente a:

- 
- a) La aplicación de políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y los adolescentes.
  - b) La creación de programas de atención integral, para aquellos que lo necesiten, por carencia temporal o permanente: niños y adolescentes con capacidad diferente, situación de desamparo o marginalidad.
  - c) La implementación de medidas apropiadas para que los niños tengan derecho a beneficiarse de los servicios de instalaciones de guarda, especialmente en el caso de que los padres trabajen.
  - d) La adopción de programas integrales y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.
  - e) La aplicación de programas de garantías para la protección jurídico-social de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, y de educación para la integración social.
  - f) La adopción de programas de promoción de la niñez

y adolescencia en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.  
g) La creación de sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional”.

Medidas que permiten observar la atención integral de las personas en estos grupos de la población. Por otra parte, se encuentra el **Decreto 214** de 2014, Artículo 6, sobre el Concepto de Asistente Personal, que describe a quienes atenderán en sus cuidados a las personas con discapacidad: “Se considera Asistente Personal a aquella persona capacitada que en forma directa y personal presta el servicio de asistir al beneficiario en la realización de las actividades básicas de la vida diaria, o la realiza cuando por su situación no puede éste ejecutarlas por sí mismo”, lo cual permite observa la regulación de la atención a este grupo de la población. En relación con las personas mayores, la **Ley 18.617** para las personas mayores, en su Artículo 5. Derógase la **Ley 17.796**, señala las siguientes medidas:

- 
- 1) Promover el acceso a la atención integral de su salud en la prevención, asistencia y eventuales procesos de rehabilitación, tanto en la esfera pública como privada, siguiendo el modelo de “cuidados progresivos”. Para ello se privilegiará la atención con base comunitaria creando alternativas a la institucionalización y generando condiciones de apoyo para la atención en el ámbito familiar.
  - 2) Promover que el sistema de salud tanto en el ámbito público como en el privado asegure la medicación básica para uso gerontológico, al costo más bajo posible.
  - 3) Colaborar con el Ministerio de Salud Pública fijando las bases sobre las cuales éste controlará las condiciones básicas de funcionamiento de los establecimientos de atención, inserción familiar y residencia del adulto mayor, sean públicos o privados, dando así cumplimiento a la Ley 17.066, del 24 de diciembre de 1998.
  - 4) Coordinar las políticas sociales y los programas de asistencia en alimentación y vivienda a los efectos de que contemplen las necesidades de los adultos mayores que requieran dicho apoyo.
  - 5) Fomentar programas de capacitación y de formación de los técnicos, profesionales y funcionarios que estén en relación con los adultos mayores haciendo conocer los derechos específicos de esta etapa etárea.
  - 6) Promover la incorporación en los programas de educación componentes relativos a la adopción de estilos de vida apropiados encaminados a lograr una vejez saludable.

- 7) Estimular la participación activa del adulto mayor en actividades de recreación, promoviendo la accesibilidad en el transporte, en la eliminación de barreras arquitectónicas y en el desplazamiento.
- 8) Facilitar al adulto mayor el acceso al sistema educativo como medio de mantener su inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus requerimientos vocacionales y permitirle la actualización y el enriquecimiento de su acervo cultural individual.
- 9) Proporcionar al adulto mayor oportunidades de transmitir a los jóvenes la experiencia adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito de la educación técnica como empresarial o por acuerdos con los gremios de cada sector.
- 10) Incluir en las políticas habitacionales nacionales normas que garanticen el acceso a una solución habitacional digna y decorosa, de costos accesibles y de ambientes agradables y seguros con destino a los adultos mayores, incluyendo aquellos que padecen diversos grados de pérdida de autonomía y discapacidad.
- 11) Estimular la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de mantener niveles de integración social que permitan vivir la etapa plenamente.
- 12) Promover la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la enseñanza la valoración del adulto mayor tanto en la sociedad como en las familias.
- 13) Promover la capacitación en prevención de la violencia hacia el adulto mayor tanto en la comunidad como en el ámbito doméstico, haciendo conocer sus derechos legales al respecto.
- 14) Promover procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad laboral, incorporando formas parciales de trabajo que se desarrollen en actividades similares o diferentes a las originalmente desempeñadas por el trabajador.

■ **¿Consideran la participación de los hombres en la realización de estos trabajos?**

Sí. La solución que Uruguay ha diseñado a la asignación de los trabajos de cuidado con sesgos de género es el **Sistema Nacional Integrado de Cuidados** (que además se ve reflejada en las demás normas aquí mencionadas) que considera la necesidad de modificar la división sexual del trabajo y la participación de diferentes actores, entre ellos, los hombres, aunque solo considera como derechohabientes a las personas dependientes. De esta forma, el sistema contribuye a agilizar los cambios que deben presentarse en la división sexual del trabajo, ya que la igualdad de género no podrá lograrse mientras permanezcan las tareas distribuidas con criterios de género. Esta propuesta, de alguna manera, también favorece los autocuidados de las personas no dependientes, ya que pueden disponer de tiempo para verse como personas que necesitan cuidados.



¿Consideran la participación de las empresas y de la comunidad?

Sí, el modelo seguido por Uruguay incorpora los diversos actores involucrados en los cuidados de las personas.

¿Cuál es la forma de participación del Estado?

El Estado diseña la política de atención de los cuidados con la participación de los diversos actores que ofrecerán los bienes y servicios necesarios para garantizarlos.

¿Quién elaboró las normas y es(son) responsable(s) del problema?

Las normas fueron elaboradas por el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay; sin embargo, involucran al Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, a las empresas y la comunidad: “Artículo 10. Integrantes del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Integran el SNIC: los servicios de cuidados a cargo de personas físicas, jurídicas públicas, estatales y no estatales, los servicios de cuidados a cargo de entidades privadas, la Junta Nacional de Cuidados, la Secretaría Nacional de Cuidados y el Comité

Consultivo de Cuidados La Junta Nacional de Cuidados estará integrada por el Ministro de Desarrollo Social, quien la presidirá, y los Ministros de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, de Economía y Finanzas, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social, el Presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y un representante del Congreso de Intendentes”.

¿Quién tiene voz en la definición del problema y de la solución?

El Estado es el actor fundamental en la definición del problema y su solución quien recoge la visión de la OIT y la OEA sobre los cuidados como un derecho, así como sobre las políticas necesarias para atenderlos. EL modelo de atención de los cuidados en Uruguay permite identificarlo como el **tipo c** de Batthyány: Políticas para un nuevo pacto social, orientadas a cuestionar la división sexual del trabajo y a promover el desarrollo sostenible, donde el eje del cuidado es central para el desarrollo.

MÉXICO

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Decreto del 5 de octubre de 2015, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por urgencia obstétrica 2015-10-05	El citado decreto adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estableciendo la obligación de los Servicios de Salud y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de atender a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.	Mujeres	Familias
Decreto del 23 de abril de 2015, por el que se reforman la fracción IV del artículo 18 y la fracción VII del artículo 38 y se adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	El citado decreto reforma la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 y adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Encomienda a los Municipios diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización en la materia y obliga a las autoridades pertinentes a promover campañas nacionales permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos y la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales, y a velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje.	Mujeres y Hombres	Familias

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
DOF 04/12/14/2014 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes [Abroga la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del 2000]	La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional,	Niñas, Niños y Adolescentes	Mujeres, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales e indígenas
Última reforma publicada DOF - 04-12- 2014/2011 Ley General de Prestación de Servicios Para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil	La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.	Niños y Niñas	Personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
Decreto por el que se reforma la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. 2013-11-12	Reforma la fracción V del artículo 11 de la citada Ley para disponer "preferir la igualdad de circunstancias y con equidad de género, a las personas que tengan a su cargo menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios".	Mujeres	Niñas, niños y adolescentes
DOF- 22-08-12/2012 Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios Para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil	El presente ordenamiento tiene por objeto regular la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, únicamente en lo que corresponde al ámbito federal. Sus disposiciones son de orden público e interés social.	Niños, Niñas y Adolescentes	Personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
Reglamento de la ley General para la inclusión de las personas con discapacidad 2012	El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar en el ámbito de la Administración Pública Federal, la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad y orientar el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, incluido el de su capacidad jurídica, bajo el principio de igualdad y no discriminación y la equiparación de oportunidades, con irrestricto apego a los instrumentos nacionales e internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos que resulten aplicables, para lo cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal procurarán una debida coordinación con las instituciones públicas federales, de las entidades federativas y de los municipios, así como con la participación de los sectores privado y social. Sus disposiciones son de orden público e interés social.	Personas con Discapacidad y familias. (atención especializada niños y niñas)	Mujeres, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales e indígenas
Ley General Para La Inclusión De Personas Con Discapacidad (DOF)/2011	Reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.	Personas con Discapacidad y familias. (atención especializada niños y niñas)	Mujeres, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales e indígenas
NORMA Oficial Mexicana. NOM-032-SSA3-2010/2011 Ley de Asistencia Social: Prestación de Servicios de Asistencia Social Para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo y vulnerabilidad	Esta norma tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los Establecimientos o Espacios de los sectores público, social y privado que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad	Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad	Personas en situación de pobreza y residentes de zonas rurales
Acuerdo N° 592/2011 Se Establece la Articulación de la Educación Básica	La Articulación de la Educación Básica, que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria, determina un trayecto formativo, organizado en un plan y los programas de estudio correspondientes, congruentes con el criterio los fines y los propósitos de educación aplicables a todo el sistema educativo nacional, establecido tanto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de Educación.	Niños, Niñas y Jóvenes	Mujeres, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales e indígenas
Ley de los derechos de las personas adultas mayores 25 junio 2002	Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de: I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores; II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.	Personas Adultas Mayores	Familias

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA 1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores. 1999-10-27	Establece procedimientos para uniformar principios, criterios, políticas y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades en materia de asistencia social a menores y adultos mayores.	Personas Adultas Mayores y menores de edad.	Familias
Ley General de Educación/1993	Regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.	Población en general y mujeres y menores de edad en particular	Mujeres, indígenas, afro-descendientes y personas con capacidades diferentes
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2/1993 Atención a la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido	Establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la atención del recién nacido.	Mujeres embarazadas y recién nacidos	Mujeres y personas con capacidades diferentes
Reglamento de servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.1990-11-15	Se regulan las prestaciones por enfermedad, maternidad y medicina preventiva que gozan los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	Mujeres	Familias
Acuerdo por el que se incorporarán al seguro facultativo del régimen del seguro social, todas las personas que cursen estudios de nivel medio superior y superior en planteles públicos oficiales del sistema educativo nacional y que cuenten con la misma o similar protección por parte de cualquier otra institución de seguridad social. 1987-06-09	El seguro facultativo que se implanta sólo otorga al estudiante asegurado derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. El asegurado tendrá derecho a las prestaciones a que se refiere el art. 99 de la ley del seguro social (SL 1973 - Méx. 1), consistentes en asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. El Gobierno federal cubrirá en forma íntegra el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por este seguro.	Mujeres y hombres	Mujeres, jóvenes, estudiantes.
Ley General de Salud/1983	Reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.	Población en general y menores, adultos mayores, mujeres embarazadas y lactantes en particular	Mujeres, personas en situación de pobreza, indígenas y personas con capacidades diferentes

Pertinencia de la legislación mexicana frente al problema de la asignación del trabajo de cuidados no remunerado a las mujeres, lo que conduce a las mujeres a no ejercer sus derechos y a las familias a permanecer en condiciones de pobreza y sin cambio en la división sexual del trabajo.

¿Las leyes consideran el trabajo de cuidados no remunerado como un problema de desigualdad de género, que coloca en una desventaja aún mayor a las mujeres ya que al ser casi exclusivas responsables de este trabajo las excluye de otros derechos?

No se hace mención del problema de desigualdad de género y de derechos humanos que implica la asignación del trabajo de cuidados a las mujeres, tampoco se incluye a los hombres como responsables de estos cuidados, lo que obstaculiza el inicio de la modificación de la división sexual del trabajo

¿Lo representan solo como un problema que afecta a los sectores de menores ingresos y, por lo tanto, el Estado debe intervenir?

No, la normatividad muestra una visión de universalidad en las acciones que se dirigen a las personas menores, mayores y con alguna discapacidad. La **Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2016** (Abroga la Ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, del 2000), “tiene por objeto: I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos; y V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración”.

La **Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil** dice que tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad. La ley así considerada permite identificar la inclusión de valores de igualdad de oportunidades y derechos entre los sexos de estos grupos de la población; sin embargo, no es claro el papel que los diferentes poderes del Estado asumirán para garantizar los derechos de las y los niños, así como los de la población en la adolescencia. Una característica fundamental de la atención de la población infantil y adolescente es la inclusión de diversos actores, lo que podría garantizar la descarga del trabajo de cuidados por las mujeres mexicanas, para la redistribución de tareas entre diferentes actores y se facilite el ejercicio de los derechos que no le han sido garantizados, siempre que estas leyes se cumplan. Respecto de las personas con discapacidad, la **Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad** menciona que “Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.

Los principios que deberán observar las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, son:

- I. La equidad;
- II. La justicia social;
- III. La igualdad de oportunidades;
- IV. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;
- V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;
- VI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
- VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
- VIII. La accesibilidad;
- IX. La no discriminación;
- X. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;
- XI. La transversalidad, y
- XII. Los demás que resulten aplicables (Artículo 5).

La **Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores** menciona entre sus principios rectores la autonomía y autorrealización, la participación y la equidad en el sentido del trato justo sin distinción de sexo, situación económica, identidad étnica y otras circunstancias, lo que muestra la atención a la interseccionalidad, que da características específicas a las personas de este grupo poblacional.

¿Se observa en la legislación que refieren a los problemas/especificidades que se plantean desde una mirada interseccional?

Sí, la **Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes** señala que “en la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos”(Artículo 10).

En el caso de las personas mayores, como se anotó en la pregunta anterior, la legislación menciona el trato justo sin distinción de sexo, situación económica, identidad étnica



y otras circunstancias, lo que muestra la atención a la interseccionalidad que da características específicas a las personas de este grupo poblacional. Para las personas con discapacidad se menciona como principio la igualdad de oportunidades, por lo que tendría que considerarse los demás rasgos de diferenciación para el acceso igualitario a los servicios y bienes incluidos en las leyes.

¿Consideran al trabajo de cuidados no remunerado como un obstáculo para la participación de las mujeres en el trabajo remunerado?

No, la normatividad revisada sobre los cuidados no alude a las dificultades de las mujeres para participar en el mercado de trabajo por razones de asignación de los trabajos de cuidado; sin embargo, se considera que la garantía de los cuidados para las personas menores, mayores y con alguna discapacidad podría facilitar la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.

Coherencia de las acciones propuestas en la Ley con los objetivos de reconocimiento de los cuidados de las personas como trabajo asignado a las mujeres que no les facilita el ejercicio de otros derechos, como el trabajo remunerado, por lo que es necesario la modificación de la división sexual del trabajo.

¿Qué solución ofrecen a los sesgos de género en la asignación de estos trabajos?

No hay alusión a resolver los sesgos de género en la asignación de los trabajos de cuidado. La **Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes** dice que: “Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida” (Artículo 11). Entre los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentra la igualdad sustantiva que trata de considerar las oportunidades y derechos iguales entre mujeres y hombres de estos grupos de la población. Además, en el Artículo 17 se menciona que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones; y III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos”. Sobre los derechos de las personas con discapacidad (sustentadas en la **Ley General Para la Inclusión de las**

**Personas con Discapacidad**) sobresalen gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible (Artículo 7); el derecho al trabajo y empleo en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. (Artículo 11); el derecho a la educación prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional (Artículo 12); el derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras (Artículo 16); el derecho al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral (Artículo 19); el derecho a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad (Artículo 21). Además, quedan establecidos en la ley el derecho al deporte, a la cultura, la recreación y el desarrollo de sus capacidades artísticas. En el Artículo 6 de la **Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores** se establece que el Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral, y seguridad social a las personas adultas mayores.

¿Consideran la participación de los hombres en la realización de estos trabajos?

No hay mención de la participación de los hombres en la realización de estos trabajos

¿Consideran la participación de las empresas y de la comunidad?

Sí, las empresas se señalan como espacios que deben ser accesibles para las personas con discapacidad y para las personas mayores; sin embargo, no se hace mención de la participación de las empresas como parte de los actores para garantizar los cuidados de las personas, la mención es sobre los derechos de las personas de contar con oportunidades de acceso a los bienes y servicios que ellas ofrecen. Respecto de la comunidad, también se habla de la no discriminación que el Estado debe garantizar, sin considerar su papel en los cuidados de las personas.

¿Cuál es la forma de participación del Estado?

El Estado participa con el diseño de las normas y el otorgamiento de bienes y servicios.

¿Quién elaboró las normas y es(son) responsable(s) del problema?

Las normas fueron elaboradas por la Cámara de Diputados y Senadores, las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Salud, aunque claramente también son responsables del problema las empresas y organizaciones de la sociedad civil.

¿Quién tiene voz en la definición del problema y de la solución?

Hasta este momento, el Estado es uno de los actores fundamentales a través de diversas dependencias gubernamentales y del poder legislativo que diseñan las leyes y los programas de atención.

Con las medidas que se observan en las leyes que atienden los cuidados de la población infantil, con discapacidad y adultas mayores, es posible observar la incorporación de



la perspectiva de género en todas ellas; sin embargo, el nivel de incorporación solo es en relación a la igualdad de trato y oportunidades respecto de las acciones de atención que les brinda el Estado y no a un reconocimiento de la importancia de considerar al propio Estado, a las empresas y a la comunidad en el desarrollo de trabajos de cuidado, lo que desfavorece el ejercicio de todos los derechos por parte de las mujeres. Se puede decir que en México se cuenta con políticas caracterizadas según la clasificación de Batthyánym como **tipo a**, es decir, Políticas de corto plazo: que tienden al asistencialismo, carecen de procesos de evaluación de calidad); de políticas **tipo b**: Políticas sistémicas e integrales, orientadas a la distribución y a promover un papel activo del Estado, que involucran un proceso de reconocimiento del trabajo no remunerado sin cuestionar la asignación a las mujeres. Son políticas que se vinculan con los sectores de educación y trabajo.

Las características de las leyes en México tienden al asistencialismo, pues los programas que se derivan de ellas consisten en ofrecer apoyos monetarios y servicios temporales que no garantizan todos los derechos establecidos en las leyes, aunque también se puede observar que existen lineamientos de evaluación que permiten observar los límites de las leyes con posibilidades de modificar los objetivos de las políticas.

## LA POLÍTICA LABORAL DEL ÁMBITO PÚBLICO EN MÉXICO

Los programas de fomento al empleo remunerado de las mujeres han mostrado resultados no favorables respecto de la distribución del trabajo global, esto es, la suma del trabajo no remunerado en los hogares –el de cuidados más el de mercado–, ya que dejó en manos de las mujeres el primero, lo cual significó una sobrecarga laboral para ellas, como se observa en el cuadro sobre el promedio de horas de trabajo remunerado y no remunerado por sexo y condición de habla de lengua indígena, de este documento.

Las diversas acciones que deberían incidir en la distribución de los tiempos de los trabajos con fines de garantizar igualdad en el acceso y ejercicio pleno de los derechos por las mujeres y los hombres, como son la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación; el Modelo Empresa Familiarmente Responsable; el Programa Sectorial del Trabajo; y el Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social aún tienen un impacto limitado entre la población de mujeres y hombres, ya que son mecanismos de transformación de las condiciones de trabajo opcionales (véase el cuadro siguiente); o la calidad de los servicios es deficiente o la implementación de los programas es limitado.

LEY	OBJETO	SUJETOS	OTROS SUJETOS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación</b>	Mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.	Centros de trabajo públicos, privados y sociales establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad.	Trabajadoras y trabajadores
<b>Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.</b>	El programa tiene como objetivo garantizar el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil de los niños que son hijos de madres que trabajan, buscan empleo o estudian, y a los padres solos con hijos o niños, a través de subsidios a alguna estancia infantil inscrita al programa	Madres, padres solos, tutores o principales cuidadores con hijos de 1 y hasta 3 años 11 meses de edad, o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad en casos de niñas(os) con alguna discapacidad	Familias
<b>Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018</b>	a) Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva.; b) Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; c) Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral y, d) Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral	Trabajadoras y trabajadores	Familias
<b>Distintivo: Modelo de Reconocimiento a Empresas Familiarmente Responsables, Secretaría del Trabajo y Previsión Social</b>	Acreditad ser promotora de buenas prácticas laborales en las materias de equidad de género, prevención y combate a la violencia laboral y al hostigamiento sexual, así como de acciones y políticas para favorecer que trabajadores y trabajadoras atiendan sus responsabilidades familiares. Su aplicación es opcional.	Trabajadoras y trabajadores	Familias de trabajadoras y trabajadores

Lo anterior conduce a reflexionar sobre el alcance de las leyes vinculadas a los cuidados de las personas, ya que en México las leyes consideradas mencionan aspectos que no se observan en la realidad, como la garantía que deben tener las personas en la etapa de la niñez y la adolescencia, a una vivienda, a la educación, a las tecnologías de la información o a un empleo de calidad. El acceso que estos grupos tienen es deficiente y será necesario realizar una investigación en los demás países de este estudio para conocer el grado de aplicación de las leyes.

Los tres componentes de las leyes sobre los cuidados de las personas dan características a su aplicación e interpretación al ser generadas y observadas por personas con valores, juicios y otras construcciones subjetivas que marcan su modo de pensar y actuar. En cada uno de los países se aplican las leyes según las valoraciones de las y los servidores públicos vinculado a las mismas, así como las que tiene la propia sociedad. Si ellas/os y la sociedad mantienen en su pensar y actuar que las mujeres son las que pueden realizar los trabajos de cuidado mejor que cualquier otro actor, las leyes quedarán disminuidas a palabras sin hechos. Si consideramos que las mismas leyes en la mayoría de los países analizados no representan modificaciones a la división sexual del trabajo, los resultados serán la reproducción inevitable de las asignaciones de género de los

trabajos, y con ello mayores dificultades para las mujeres en el ejercicio de todos sus derechos.

En el caso de México, la mención que se hace de los derechos de las personas en las leyes, particularmente de la igualdad de género como un principio que debe regir la acción pública tiene un reducido impacto debido a que, tanto en las y los funcionarios y servidores públicos como en la sociedad en general, permanecen con valores familistas y de asignaciones de género que limitan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

En Uruguay, las personas que echaron a andar la política de cuidados respondieron a un movimiento de mujeres que demandaba la atención del problema (envejecimiento de la población) a través de la organización y gestión con la sociedad política y a un punto de vista político que reconocía la necesidad de colocar en la agenda pública el tema de los cuidados de las personas y los derechos de las mujeres. En los resultados cualitativos de esta investigación se profundará sobre estos aspectos.



El diseño de la política relacionada a los cuidados de las personas en América Latina muestra aun el sesgo familista en México, Argentina, Brasil y Costa Rica, lo que reproduce la asignación de estas tareas a las mujeres. Aunque en Brasil y Costa Rica las leyes señalan la participación de los hombres en las actividades de cuidado no se mencionan con especificidad tales actividades, lo que podría reducir su participación en algunas que ya realizan. Un problema identificado es que la inclusión de los hombres en los cuidados hace referencia a los dirigidos a la infancia; sin embargo, los que se dirigen a las personas mayores, con alguna enfermedad o discapacidad, solo consideran el otorgamiento de servicios por parte del Estado, lo que podría significar que las mujeres asuman la alimentación y el

## A MANERA DE CONCLUSIÓN, UN ANÁLISIS GENERAL DE LA POLÍTICA

transporte hacia los centros de atención para ellas/os.

Aunque se observan avances importantes en el diseño de medidas para la participación de las mujeres en las actividades laborales remuneradas, sigue pendiente que los hombres participen en los mismos términos que las mujeres en el trabajo no remunerado, que el Estado provea servicios de cuidado de calidad y las empresas consideren el papel social que tienen para desarrollar a los países con igualdad de derechos y de género. Ya que las características de las leyes analizadas que definen los programas y acciones para los cuidados muestran la reproducción de los sesgos de género en la asignación de tareas no remuneradas, las mujeres continuarán con dificultades para ejercer otros derechos, como el acceso al trabajo remunerado, a mejores ingresos, al tiempo libre, a la formación y capacitación, y a la participación política.

La identificación de las leyes, según clasificación de Bathyyány, muestra que el país con menores propuestas de cambio en las asignaciones de género de los trabajos de cuidado y remunerado es Argentina, al que sigue México, luego Brasil y después Costa Rica, para llegar finalmente a Uruguay, que tiene la mejor propuesta para modificar la división sexual del trabajo que limita el ejercicio de los derechos por las mujeres.

### IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES SEGÚN CLASIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CUIDADO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE BATTHYÁNY

<b>ARGENTINA</b>	<b>Políticas tipo a:</b> Políticas de corto plazo: que tienden al asistencialismo y no consideran el seguimiento de sus resultados.
<b>BRASIL</b>	<b>Políticas tipo b:</b> Políticas sistémicas e integrales, orientadas a la distribución y a promover un papel activo del Estado, Son políticas que se vinculan con los sectores de educación y trabajo.
<b>COSTA RICA</b>	<b>Políticas tipo b:</b> Políticas sistémicas e integrales, orientadas a la distribución y a promover un papel activo del Estado, Son políticas que se vinculan con los sectores de educación y trabajo
<b>URUGUAY</b>	<b>Políticas tipo c:</b> Políticas para un nuevo pacto social: orientadas a cuestionar la división sexual del trabajo y a promover el desarrollo sostenible, donde el eje del cuidado es central para el desarrollo.
<b>MÉXICO</b>	<b>Políticas tipo a:</b> Políticas de corto plazo: que tienden al asistencialismo y no consideran el seguimiento de sus resultados y Políticas tipo b: Políticas sistémicas e integrales, orientadas a la distribución y a promover un papel activo del Estado, Son políticas que se vinculan con los sectores de educación y trabajo



En Argentina y México, las leyes señalan el papel principal de las familias en las tareas de cuidados de la población en etapas de niñez y adolescencia, aunque resaltan la responsabilidad del Estado en el otorgamiento de servicios para las personas mayores, con alguna discapacidad y/o enfermedad; sin embargo, son los servicios los que reclaman la participación de las familias y, con esto, de las mujeres. En Brasil y Costa Rica se presentan propuestas legales que consideran actividades como la transportación de las

personas y su alimentación, lo que permite observar una atención más amplia que facilitaría a las mujeres el contar con tiempo disponible para el ejercicio de los derechos mencionados antes. En relación con la atención de la composición diversa de la población en términos de sexo, lugar de residencia, pertenencia a pueblos originarios y edad, las menciones que hacen las leyes sobre los cuidados de las personas son las siguientes:

ARGENTINA	Las acciones se toman según demandas de las familias y la comunidad
BRASIL	Mención explícita de los rasgos de interseccionalidad
COSTA RICA	Las acciones se toman según usos y costumbres propios del medio sociocultural
URUGUAY	Las acciones se toman según las preferencias sobre el tipo de cuidado a recibir considerando los rasgos de las personas
MÉXICO	Mención explícita de los rasgos de interseccionalidad

La intención de ofrecer un reconocimiento social del trabajo de cuidados se ve limitado ante la ausencia de políticas amplias de participación de los diferentes actores involucrados en los cuidados de las personas, como son el Estado, las empresas, las familias y la comunidad, por dos razones fundamentales: primero, se sigue mostrando el trabajo de cuidados de la niñez y la adolescencia como propio de las mujeres y de la esfera privada; y segundo: por la ausencia de mostrarlo como un trabajo que genera valor necesario para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Hasta el momento, este trabajo representa un subsidio que otorga a la administración pública para cumplir con sus funciones.

Sin duda, una experiencia diferente la representa Uruguay, en donde las normas generaron el **Sistema Nacional Integrado de Cuidados**, que cuestiona la asignación de género a las mujeres de los trabajos para garantizar bienestar e involucra a los cuatro actores señalados anteriormente; reconoce los derechos que las mujeres pueden perder debido a la organización con sesgos de género de los trabajos no remunerados y remunerados; además, también reconoce en ese trabajo una base fundamental para el funcionamiento de la sociedad y la economía. La intervención pública no solo debe responder a aliviar los problemas de pobreza y las desigualdades de género en los sectores de menores ingresos (buscando la participación de las mujeres en el trabajo remunerado para aportar sus ingresos en la mejora de las condiciones de vida de las y los

diferentes integrantes de sus familias), sino que debe tener impacto en la sociedad de manera integral con la finalidad de modificar los estereotipos de género y, con esto, de roles, pensamientos y costumbres -como lo establece Uruguay . De otra manera, el impacto será limitado y el fantasma de la división sexual de trabajo continuará rondando en la sociedad, principalmente entre el sector que controla los medios de producción, de información y de comunicación, centrales en la formación de la comunidad. La propuesta de Uruguay, aunque digna de ser aplaudida, cuenta con una limitación en relación con la ubicación de la necesidad de cuidados en las personas dependientes y no como un derecho de toda la población. Identificar a la población que requiere cuidados en las personas menores y mayores, con alguna discapacidad o enfermedad, excluye al resto de la población que también requiere de ellos en su forma de autocuidado como alimentarse, asearse, formarse, hacer deporte, divertirse, lo que exige tomar otras medidas, como la organización del trabajo en el ámbito público, es decir, observar y, en su caso, modificar horarios laborales, prestaciones, contratos y salarios; además de la propia organización del trabajo al interior de los hogares en relación con las actividades que cada integrante de la familia puede realizar, así como los horarios establecidos para ello. Particularmente, el panorama que nos muestra el conjunto de leyes en México es de desarticulación institucional, discurso sin acción, comportamiento de colectivos sociales y políticos sin arraigo, empatía, ni compromiso con la igualdad social y de género en el acceso y ejercicio a los

derechos, predominio de patrones de conducta por sexo con perspectiva tradicional y comunidades en desventaja que dejan de serlo para convertirse en comunidades adaptadas a la dependencia del asistencialismo. El análisis de los componentes del fenómeno legal (véase el Marco Teórico, supra) muestra la necesidad de intervenir en los principios que tienen tanto el personal de las dependencias públicas y privadas como las familias y sus integrantes, ya que tales principios, valoraciones y comportamientos podrían significar limitaciones para que las

leyes puedan ser implementadas, como en el caso de México. Tenemos que actuar, convertir las palabras en hechos concretos. Debemos insistir en reconocer la necesidad de la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y no solamente referirnos a la intervención del Estado, del sector privado –empresarial y comercial-, sino a la propia familia en su conjunto y a los hombres en particular. Es indispensable la participación masculina en tareas de cuidado como sujeto y objeto clave para la igualdad y el desarrollo social.





# UN EJEMPLO ILUSTRATIVO DE LA VISIÓN DE ALGUNOS ACTORES POLÍTICOS



A

A continuación, se presentan los resultados de una entrevista realizada vía correo electrónico a la señora Ana I. Rojas Chavarría, profesional Especialista en Género y Trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica. Las preguntas se diseñaron para conocer su opinión sobre el contexto político de la aprobación de las leyes de su país vinculada al tema de cuidados de las personas. La respuesta se recibió en abril de 2017.

deporte, arte, toma de decisiones y otros.

Uno de los recursos analíticos fundamentales para el estudio de los problemas sociales es la categoría de Género. El género influye en el ejercicio de los derechos, de cualquiera de ellos, incluido el derecho al trabajo remunerado y al de cuidados, el derecho de decir “no” a los cuidados así como a ser cuidada/o. El punto de partida metodológico es el enfoque de género. La aplicación de la categoría de Género en los procesos de conocimiento y análisis de la realidad social, así como en la formulación de políticas, es una condición básica para alcanzar un desarrollo con igualdad en términos sociales y entre mujeres y hombres.

Asimismo, al reconocer que el género y las desigualdades sociales que produce no solo se configuran por las características sexuales sino por otro conjunto de rasgos que hacen diferencias en el trato social, como la clase social, la edad, la etnicidad, la orientación y preferencia sexual, la condición de migración y el lugar de residencia, será importante observar si la normatividad considera estas diferencias para proponer las acciones que resuelvan el problema.

La investigación se realizará con las perspectivas cualitativa y de revisión documental, de esta manera se logra obtener una imagen amplia de las políticas públicas que tienen incidencia en la distribución de los trabajos de cuidado y remunerado en la sociedad y las familias. La perspectiva cualitativa busca contar con el punto de vista de las personas que diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas relacionadas con los cuidados y el trabajo remunerado. Estudia las políticas en su contexto, tal y como son formuladas, intentando interpretarlas de acuerdo con los significados que tienen para las personas involucradas.



¿Cómo surgió la necesidad de incluir en la normatividad del país el tema de los cuidados para la población (bajo la perspectiva de corresponsabilidad de los hombres y del estado)?

Costa Rica ha tomado diferentes medidas para atender el tema de la corresponsabilidad social de los cuidados a lo largo de más de 15 años. Una de las primeras acciones fue aprobar la **Ley de Paternidad Responsable** (2001). Con esta ley se comenzó a deconstruir el pensamiento que hasta entonces había prevalecido sobre la paternidad y era el que las mujeres debían demostrar la paternidad de los hijos o hijas. A partir de esta ley, los hombres se someten a una prueba de ADN cuando no aceptan la paternidad. Esta ley apuntó a la creación de un mecanismo ágil para el reconocimiento paterno desde la vía administrativa y un mejoramiento de los procedimientos judiciales para el mismo fin. En la administración anterior (2010-2014), a cargo de la señora Laura Chinchilla se aprobó la Ley 9220, que crea la **Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil**,<sup>11</sup> con la finalidad de establecer un sistema de cuidado y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios para fortalecer y ampliar las alternativas de atención integral (Artículo 1). La ley se crea atendiendo la necesidad de procurar que los servicios de cuidado y desarrollo infantil permitan la inserción laboral y educativa de los padres y las madres. Las alternativas de cuidado se brindan a menores de seis años, no obstante, dependiendo de la situación, se puede ampliar hasta los 12 años.

El INAMU desarrolló una serie de talleres de capacitación a las personas que integran las diferentes alternativas de cuidado con el propósito de sensibilizar y capacitar sobre el tema de la corresponsabilidad social de los cuidados. Para el 2015 se habían capacitado 304 alternativas de cuidado. La Política Nacional de Igualdad de Género (PIEG, 2007-2017) tiene como primer objetivo el tema de cuidado como responsabilidad social. El objetivo pretende que en el 2017 toda mujer que requiera de servicios de cuidado de niñas y niños para desempeñarse en un trabajo remunerado cuente con al menos una alternativa de cuidado pública, privada o mixta, de calidad, lo que implica dar pasos concretos hacia la responsabilidad social en el cuidado y la valoración del trabajo doméstico. A partir de este objetivo se comienza a trabajar intersectorialmente e identificar acciones, indicadores y compromisos para atender el objetivo. A partir de la PIEG se posiciona el tema de la corresponsabilidad social en el cuidado como un asunto estratégico para el avance en la igualdad.

¿Hubo influencia del movimiento de mujeres, fue respuesta a los compromisos internacionales o a compromisos nacionales?

Para elaborar la PIEG, el INAMU desarrolló un proceso participativo a nivel nacional. Ello implicó realizar una serie de consultas con el movimiento de mujeres y, sin duda alguna, éste tuvo una influencia importante en la visibilización y colocación del Objetivo 1. Desde el diseño metodológico se planteó como punto central establecer el diálogo con diferentes actores sociales. La Encuesta de Uso del Tiempo de la Gran Área Metropolitana 2011 (EUT-GAM) arrojó resultados importantes en esta materia. Las mujeres dedican más del doble del tiempo al trabajo no remunerado (trabajo doméstico, cuidado y voluntario) del que dedican los hombres a este tipo de actividades; las mujeres tienen la mayor Carga Global de Trabajo (sumatoria del trabajo remunerado y trabajo no remunerado) con respecto a los hombres, el cual se presenta en todo el ciclo de vida. La EUT-GAM 2011 sirvió de sustento para alimentar las políticas públicas, en particular la PIEG y la Red Nacional de Cuido. Otros insumos son las estadísticas de empleo y desempleo a través de la Encuesta Continua de Empleo que saca el INEC por trimestre. Las mujeres tienen mayores tasas de desempleo que los hombres y una menor participación porcentual en el mercado laboral.

¿Consideras que la posición política del partido gobernante en el momento de la aprobación y publicación de las leyes sobre paternidad responsable y la modificación al Código de la Niñez y la adolescencia, que responsabiliza a padre y madre de los cuidados de hijas e hijos, fue determinante en esa aprobación? ¿Hubo otros factores?

Fue determinante.

¿Observas la aplicación clara de las leyes sobre cuidados de las personas, en particular, las dos mencionadas anteriormente?

En Costa Rica, al igual que en otros países, existen problemas de congruencia entre la existencia de las leyes y su aplicación. Aún sigue habiendo faltantes para la aplicabilidad de las normas y las leyes. En algunos casos, por asuntos administrativos o de gestión administrativa, por falta de identificación y asignación de fuentes de financiamiento claramente explicitadas. En el caso de la Red de Cuido la ley establece claramente la fuente de financiamiento (4% de

los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF); sin embargo, estos recursos son insuficientes para cubrir la demanda. También se suma a lo anterior, la falta de capacidad técnica, voluntad política.

¿Existen obstáculos para que la población ejerza el derecho a los cuidados?

Sí.

¿Cuáles son esos obstáculos, si fuera el caso?

Obstáculos económicos y culturales. En particular los roles de género subsisten en la mayoría de la población (se considera que quien mejor cuida a las personas menores son las madres) y una fuerte división sexual del trabajo tradicional. En

Costa Rica aún persiste la práctica de resolver el tema de los cuidados mediante arreglos familiares y menos por la vía de la compra de servicios en el mercado. En la actualidad, existe un aproximado de 60,000 niños/as que acuden a alguna alternativa de cuidado. Se tiene el problema del sub-registro de opciones de cuidado privadas o generadas por las propias organizaciones públicas y privadas como, por ejemplo, aquellas que se abren a través de convenios colectivos o asociaciones de trabajadores como Solidaristas. Es importante señalar que, durante la presente Administración del presidente Solís Rivera, se ha puesto mucho interés en avanzar hacia el fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y de institucionalizar las diferentes modalidades de alternativas de cuidado, generar alianzas público-privadas y atender también a las personas que cuidan.

## COMENTARIOS

La experiencia de Costa Rica muestra que la voluntad de los actores políticos en los países es fundamental en el reconocimiento de las necesidades de la población, en particular atender la división sexual del trabajo, el derecho a los cuidados, al trabajo remunerado y al bienestar en general. La manifestación de la población y de las organizaciones de mujeres que exigen que los gobiernos generen las condiciones para el ejercicio de sus derechos es un punto de

partida necesario en relación con el diseño e implementación de las políticas más eficientes y acertadas para la distribución de los trabajos entre mujeres y hombres y entre familias, Estado, empresas y comunidad, que garantice el ejercicio de todos los derechos por parte de toda la sociedad. Esta organización social también es importante para garantizar el cumplimiento de las leyes que se han formulado para atender ese objetivo.



<sup>11</sup> Cuido es el equivalente de cuidado, mía para desarrollar las actividades y atender por sí mismas sus necesidades básicas de la vida diaria (Artículo 8).

# LECCIONES PARA MÉXICO DE LAS EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS DE CUIDADOS DE OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS



L

as lecciones que México debe tener presentes para el diseño de políticas de cuidados son las siguientes:

■ Asumir un compromiso de hecho con la atención de las desigualdades en la distribución de los trabajos remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres.

■ Reconocer la necesidad de asumir de manera corresponsable los trabajos de cuidado, asignando con convicción las tareas específicas que el Estado, las empresas, la comunidad, las familias, las mujeres y los hombres deben asumir.

■ Articular las políticas que existen y diseñar las que faltan a partir del contexto específico de la población, es decir, reconociendo sus características particulares en relación con su condición y posición de género con las intersecciones correspondientes.

■ Reformular la política para la igualdad de género incorporando estrategias amplias para el conocimiento de las desigualdades de género en el acceso y disfrute de todos los derechos de manera que se empiecen a modificar los patrones de conducta por sexo.

■ Incluir en las agendas de las comisiones legislativas de trabajo, igualdad de género, salud, educación, cultura y economía el tema de los cuidados como parte de las problemáticas que deben atender.

■ Considerar el diseño de una ley del trabajo no remunerado, donde se establezcan jornadas, responsabilidades, derechos, tareas y atención de malas prácticas. Esta ley debe partir de la igualdad de género en las familias y los hogares y de la corresponsabilidad entre Estado, empresas, comunidad y familias.

■ Convocar a las organizaciones de mujeres a la discusión del tema de los cuidados como un derecho de todas y todos.

■ Reconocer que las condiciones de inseguridad que vive el país dificultan aún más la discusión sobre la distribución de los trabajos remunerado y no remunerado, así como las acciones para los cuidados y los cuidados mismos.



# FUENTES DE INFORMACIÓN



**Acosta Félix y Marlene Solís, 2014.** Jefatura femenina y política social. México Social. Revisado en [mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/521-jefatura-femenina-y-politica-social](http://mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/521-jefatura-femenina-y-politica-social)

**Aguirre Rosario (2014).** La política de cuidados en Uruguay: ¿un avance para la igualdad de género?. En Estudios feministas Florianópolis.

**Aguilar, L. F., (2015):** Gobernanza y política pública para la igualdad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Instituto de Investigación en Política Pública y Gobierno, Universidad de Guadalajara. Primera Edición.

**Aguilar P, Valdés J, González A., M. y González, S. (2013):** Los roles de género de los hombres y las mujeres en el México contemporáneo, Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 18, núm. 2: 207-224 julio-diciembre, Universidad Autónoma del Estado de México.

**Alberti M., P., Zavala H., M., Salcido R., B. y Real L., N. (2014):** Género, economía del cuidado y pago del trabajo doméstico rural en Jilotepec, Estado de México, en revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo, vol. 11, núm. 3, Texcoco, julio-septiembre. Enlace

69 [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1870-54722014000300007](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722014000300007)

**AWID, 2004.** Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica revisado en [http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21639/1/2\\_awid\\_interseccionalidad.pdf](http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21639/1/2_awid_interseccionalidad.pdf)

**Batthyany, Karina. 2015.** Las políticas y el cuidado en América Latina. Una mirada a las experiencias regionales. Serie Asuntos de Género 124. CEPAL/Cooperación Española.

**Benavente R, M.C. y Valdés B, A. (2014),** Políticas públicas para la igualdad de género: un aporte a la autonomía de las mujeres,

Libros de la CEPAL, N° 130 (LC/G.2620-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

**Berger Peter y Thomas Luckman (1991).** La construcción social de la realidad. Amorrortu Editores. Argentina

**Borderías, C., Carrasco, C. y Torns, T. (2011):** El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Catarata. Madrid.

**Bueno Suárez Carlos y Osuna José Luis, 2013.** Evaluación del diseño de políticas públicas: propuesta de un modelo integral. Revista del CLAD reforma y democracia No. 57

**Bustelo María y Emanuela Lombardo (2005).** Mainstreaming de género y análisis de los diferentes ‘marcos interpretativos’ de las políticas de igualdad en Europa: el proyecto MAGEEQ. En Aequalitas 17. PP. 15-26

**Bustillos D., S. y Rincones D., R. coord. (2014):** Políticas públicas, cuidado e infancia, El Colegio de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Inmujeres, Primera edición.

**Carrasco Cristina, 2006.** La paradoja del cuidado: necesario pero invisible. Revista de Economía Crítica nº 5. Marzo de 2006, PP. 39-64.

-----**2008.** El tiempo y el trabajo desde la experiencia femenina. En Organización Panamericana de la Salud. La economía invisible y las desigualdades de género. La importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado. Washington, D.C.: OPS.

-----**2011.** La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes. Revista de Economía Crítica, nº11, primer semestre.

**Carrasquer Oto, P. (2013).** El redescubrimiento de cuidados: algunas reflexiones desde la sociología. Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 31, núm.1, p. 91-113

**CEPAL (2011).** Los derechos de las personas mayores. Materiales de estudio y divulgación. Junio. Naciones Unidas.

**CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT (2013),** Informe regional. Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe. Santiago. CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT .

**Cobo Bedía, Rosa (2005).** El género en las ciencias sociales. Cuadernos de Trabajo Social, vol. 18, PP. 249-258

**Contreras C., E., Vázquez G., V., Zapata M., E. y Bustos C., D: (2011):** Género y tecnología doméstica. Análisis de la transferencia de un paquete de ecotecnias a mujeres rurales de Querétaro, México. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, vol. 16, no. 36, enero-junio, Universidad Central de Venezuela.

**Cordourier R., G. (2011):** Cuidado infantil y corresponsabilidad trabajo-vida personal, Inmujeres, Cuadernos de trabajo, no. 37

**Chávez A., M. E. y Vázquez G., V. (2011):** La gestión de las presidentas municipales rurales de Tlaxcala, México de 1992 a 2010, desde la percepción de las protagonistas, en revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo, vol. 8, no. 1, enero-abril, Colegio de Postgraduados.

**De la Garza Toledo Enrique,** s/f. Hacia un concepto ampliado de trabajo. Revisado en <http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/Hacia%20un%20concepto%20ampliado%20de%20trabajo.pdf>

**Díaz R., Espinoza, G., Nemecio, M., y Ochoa, K. (2009):** Desarrollo y Equidad de género en el mundo rural de Guerrero, en El desarrollo rural desde la mirada local. Coord. Espinosa D., G. y León L., A., UAM-X.

**Esteve Palós, Albert y Elizabeth Florez-Paredes, 2014.** Edad a la primera unión y al primer hijo en América Latina: estabilidad

en cohortes más educadas. Notas de Población 99, diciembre de 2014

**Facio Montejo, Alda (1992).** Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis de género del fenómeno legal), ILANUD. San José, Costa Rica.

Fundación Pablo Iglesias/Fundación Friedrich Ebert (s/f). Los sistemas de cuidados. ¿Una respuesta a los nuevos desafíos de la protección y el bienestar? Experiencia europea y perspectivas para Uruguay. Seminario Internacional.

**González de Durana, Ana (2009)** El tratamiento de la dependencia en los regímenes de bienestar europeos contemporáneos. Madrid

**Inmujeres, (2014):** Diagnóstico del programa de fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Cuadernos de trabajo No. 53.

**Inmujeres (2013):** El trabajo de cuidados en los hogares mexicanos ¿responsabilidad compartida? Enlace: [http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos\\_download/101231.pdf](http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101231.pdf)

**Lázaro C., Rosa, Zapata M. Emma, Martínez C., B. y Alberti M., P. (2005):** Jefatura femenina de hogar y transformaciones en los modelos de género tradicionales en dos municipios de Guanajuato, revista de estudios de género La Ventana. Universidad de Guadalajara. Enlace: <http://www.redalyc.org/pdf/884/88402210.pdf>

**López E., S. (2007):** Políticas de cuidado infantil, género y ciudadanía: Proyecto Casas de Atención Infantil en Tijuana. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.

**López S., C. (2009):** Sacudiendo conciencias: reflexiones sobre trabajo y empleo doméstico en Chiapas, en El Desarrollo Rural desde la mirada local, UAM-X.

**Ministerio de Desarrollo Social (2014),** Cuidados como sistema. Propuesta para un modelo solidario y corresponsable de cuidados en Uruguay.

**Moreno Z., R. (2013):** Las empleadoras del área metropolitana de Monterrey: interacciones sociales y acuerdos de contratación del servicio doméstico a tiempo parcial, Revista Trayectorias, año 15, núm. 37, julio-diciembre.

**OEA-CIM (2011).** Avance de la igualdad de género en el marco del trabajo decente, septiembre.

**OIT-PNUD (2009):** Trabajo y familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. Informe, Santiago de Chile.

**OIT (2016).** Las mujeres en el trabajo, Tendencias. Resumen ejecutivo.

**OIT (2014):** La maternidad y la paternidad en el trabajo, la legislación y la práctica en el mundo. Informe de política. Servicio de género, igualdad y diversidad, Departamento de condiciones de trabajo e igualdad. Ginebra, Suiza.

**ONU Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres) e ILSB (Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C.), 2016.** Por un Sistema Social y Económico para la Vida: Agenda Pública para hacer realidad el Derecho al Cuidado. ONU Mujeres/ILSB

**Ortiz M., D y Maza D., O. (2010):** Madres solas y adolescentes en Aguascalientes. Aportaciones desde la perspectiva de género para el diseño de políticas públicas. Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

**Osuna José Luis, et al. s/f.** Guía para la evaluación de políticas públicas. Instituto de Desarrollo regional. Fundación



Fuentes de Información		
Universitaria. España.		
<p><b>Pautassi, Laura, 2007.</b> El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo.</p>		
<p><b>Pedrero N., Mercedes (2011):</b> Demografía y Previsión de demandas de cuidados de los adultos mayores en América Latina. : El trabajo de cuidado en América Latina y España. Documento de trabajo nº 54. Fundación Carolina. Madrid.</p>		
<p><b>Pérez O., A (2010):</b> Cadenas globales de cuidado:¿Qué derechos para un régimen global de cuidados justo?, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW), República Dominicana.</p>		
<p><b>Pérez O., A. y del Río, S. (2002):</b> La economía desde el feminismo: trabajos y cuidados, en Ecologistas en Acción, Madrid. Enlace: <a href="http://www.ecologistasenacción.org/article13104.html">http://www.ecologistasenacción.org/article13104.html</a> Consultado el 20 de septiembre de 2016.</p>		
<p><b>Rivas A., K., Alberti M., P., Osnaya G., M. y León m., A. (2015):</b> Mujeres rurales: del proyecto productivo a las microempresa en Champotón, Campeche, en Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 6, no. 6, Texcoco, agosto-septiembre.</p>		
<p><b>Rodríguez E. Corina (2005).</b> Economía del cuidado y política económica: una aproximación a sus interrelaciones. Trigésima octava reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Mar del Plata, Argentina, 7 y 8 de septiembre del 2005</p>		
<p><b>Rodríguez W., C. (2008):</b> Políticas públicas, acción ciudadana y los derechos de las mujeres. El caso de Cunduacán, Tabasco, en Revista Gestión y Política Pública, vol. XVII, no. 2 segundo semestre, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).</p>		
<p><b>Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2015).</b> Norma Mexicana para la igualdad laboral y no discriminación 2015, Modelo Empresa Familiarmente Responsable, Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018</p>		
<p><b>Seiz, Marta (2011):</b> La implicación masculina en los cuidados en las sociedades cambiantes de América Latina: una reflexión sobre el caso mexicano, en El trabajo de cuidado en América Latina y España, documento de trabajo No. 54, Fundación Carolina- CeALCI, Madrid. Disponible en <a href="http://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT54.pdf">http://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT54.pdf</a></p>		
<p><b>Spivak, G. Ch. (2003):</b> ¿Puede hablar el subalterno?, en Revista Colombiana de Antropología, vol. 39, enero-diciembre pp297-364, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, Colombia. Disponible en: <a href="http://www.redalyc.org/pdf/1050/105018181010.pdf">http://www.redalyc.org/pdf/1050/105018181010.pdf</a></p>		
<p><b>Tepichin V., Ana María (2012):</b> Política pública, mujeres y género, en Ordorica, Manuel y Jean Francoise Prud’homme (coords.), Los grandes problemas de México. Edición abreviada (Vol. 2, Sociedad), vol. 2. Distrito Federal. El Colegio de México, pp. 255-258. Disponible en: <a href="http://ces.colmex.mx/pdfs/anamaria/a_tepichin_15.pdf">http://ces.colmex.mx/pdfs/anamaria/a_tepichin_15.pdf</a></p>		
<p>----- <b>(2012 a):</b> Ciudadanía de las mujeres y política pública en México: una reflexión desde los estudios de género, en Juan A. Cruz y Rodolfo Vázquez (Coords.), Género, Cultura y Sociedad. Distrito Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación, Editorial Fontamara, pp. 133-159. Disponible en: <a href="http://ces.colmex.mx/pdfs/anamaria/a_tepichin_2.pdf">http://ces.colmex.mx/pdfs/anamaria/a_tepichin_2.pdf</a></p>		
<p><b>Terrazas M., B. (2009):</b> Ganar el paraíso: mujeres indígenas contra la violencia y la muerte materna, en El desarrollo rural desde la mirada local, UAM-X.</p>		
<p><b>Tobío S., C. (2013):</b> Estado y familia en el cuidado de las personas: sustitución o complemento, Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 31, núm. 1, pp17-38, Universidad Complutense de Madrid.</p>		
<p><b>Ullmann Heidi, Carlos Maldonado Valera y María Nieves Rico, 2014.</b> La evolución de las estructuras familiares en América Latina, 1990-2010 Los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y el cuidado. CEPAL.</p>		
DOCUMENTOS OFICIALES		
<p><b>CONAPAM (2012):</b> Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica, Presidencia de la República, San José. Disponible en: <a href="https://www.conapam.go.cr">https://www.conapam.go.cr</a></p>		
<p><b>CONAPO (2011)</b> Perfiles de salud reproductiva. República Mexicana, p. 23. Disponible en <a href="https://www.gob.mx/conapo/documentos/perfiles-de-salud-reproductiva-2011">https://www.gob.mx/conapo/documentos/perfiles-de-salud-reproductiva-2011</a></p>		
<p><b>FIAPAM,</b> Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores-. Disponible en <a href="http://fiapam.org/?page_id=350">http://fiapam.org/?page_id=350</a> consulta realizada el 16 octubre de 2016</p>		
<p><b>INEGI (2016),</b> Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, II trimestre de 2016. Disponible en <a href="http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/">http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/</a></p>		
<p><b>INEGI (2017).</b> Estadísticas a propósito del día de la madre (10 de mayo). Datos nacionales. p. 4 Disponible en <a href="http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf">http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf</a></p>		
<p><b>INFOLEG.</b> Información Legislativa. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Argentina. <a href="http://www.infoleg.gob.ar">www.infoleg.gob.ar</a></p>		
<p><b>Organización Internacional del Trabajo –OIT-</b>. Legislación Nacional del Trabajo, la Seguridad Social y los Derechos Humanos. Disponible en <a href="http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.byCountry?p_lang=es">http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.byCountry?p_lang=es</a> consulta realizada el 18 de octubre de 2016</p>		
<p><b>SEDESOL (2009):</b> Diagnóstico de la problemática de las madres con hijos pequeños para acceder o permanecer en el mercado laboral. Disponible en: <a href="http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PEL_VERSION_FINAL.pdf">http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PEL_VERSION_FINAL.pdf</a></p>		
<p>-----<b>(2015):</b> Diagnóstico del Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia. Disponible en: <a href="http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32356/Diagnostico_PSVJF_1_.pdf">http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32356/Diagnostico_PSVJF_1_.pdf</a></p>		
<p>-----<b>(2015):</b> Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión Social. Disponible en: <a href="http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127093/Diagnostico_del_Programa_PROSPERA._Diciembre_2015._P1.pdf">http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127093/Diagnostico_del_Programa_PROSPERA._Diciembre_2015._P1.pdf</a></p>		
<p>-----<b>(2015):</b> Diagnóstico y Propuestas de Atención, Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Disponible en: <a href="http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32256/Diagnostico_PAIMEF_2015_1_-1-50.pdf">http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32256/Diagnostico_PAIMEF_2015_1_-1-50.pdf</a></p>		
<p><b>SIPI</b> Sistema de Información Sobre la Primera Infancia en América Latina. Unesco. Disponible en <a href="http://www.sipi.siteal.org">http://www.sipi.siteal.org</a> Consulta realizada el 17 de octubre de 2016</p>		

## SÍGUENOS



[www.facebook.com/OxfamMX](https://www.facebook.com/OxfamMX)



[Twitter.com/oxfamMexico](https://twitter.com/oxfamMexico)



[@oxfamMexico](https://www.instagram.com/oxfamMexico)



**OXFAM**  
México